

Universidad de los Andes

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina

Maestría en Ciencias Políticas

**RECUESTO HISTÓRICO DE LA CONFIGURACIÓN PARTIDISTA EN  
COLOMBIA Y SUS IMPLICACIONES PARA LA ESTABILIDAD DE LA NACIÓN  
(1886-1974)**

Trabajo especial de grado presentado como requisito para optar al Título  
de Magister Scientiae en Ciencias Políticas

**Autor:** Alda Yolanda Caro Moreno

**Tutor:** María Nohelia Parra

Mérida, agosto de 2018

**“RECUESTO HISTÓRICO DE LA CONFIGURACIÓN PARTIDISTA EN COLOMBIA Y SUS  
IMPLICACIONES PARA LA ESTABILIDAD DE LA NACIÓN (1886-1974)”**

Autora: Alda Yolanda Caro Moreno

Tutor: María Nohelia Parra

**RESUMEN**

En este trabajo se hace una breve exploración de la manera en que se establecieron los ideales partidistas en Colombia, cómo moldearon la historia del país, sentaron las bases de la política clientelista y fueron promotores de la violencia fratricida. Inicialmente, se parte con el periodo de dominio conservador que data de 1886 a 1929. Si bien, en los 43 años de soberanía conservadora no se estableció una sola línea de gobierno debido a que la tendencia gubernamental era de corte personalista, sí se constituyeron las relaciones del gobierno frente a las demandas sociales de los obreros, la línea económica de dependencia del empréstito extranjero, el poder de la iglesia en el orden social y educativo y, por último, el favorecimiento de unas clases sociales sobre las otras en cuanto a la tenencia de la tierra. En el estudio de la época subsiguiente, la República Liberal, que inicia en 1930 con un gobierno timorato y termina en 1945 con la renuncia del presidente electo por segunda vez, a través del voto de confianza que le otorga las masas populares para configurar, de una vez por todas, el proyecto reformista de la *Revolución en Marcha* que contemplaba, entre otras cosas, modificar la Constitución Política para restarle poder a la iglesia, instaurar la reforma agraria y tributaria, en fin, pretendía una modernización del Estado con mejores condiciones socioeconómicas para las clases populares, se evidencia que, la oposición a la tradición del régimen conservador era suficiente para desbocar la violencia, sobre todo en la zona rural influenciada tradicionalmente por los valores de la iglesia católica. Finalmente, en el lapso comprendido entre los años 1946 hasta 1974, se hace una aproximación a las consecuencias de la *Violencia* y la necesidad del acuerdo del Frente Nacional; se toman en cuenta los eventos más importantes del transcurrir político en el país como, el asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán; el posterior enfrentamiento entre las fuerzas estatales y los grupos paramilitares que apoyaban a los conservadores en contra de las guerrillas liberales que radicalizaron su postura influenciadas por ideas revolucionarias provenientes de otras latitudes; la instauración del gobierno militar del General Rojas Pinilla que no obedecía a los ideales partidistas pero sus efectos fueron igual de nefastas que los gobiernos civiles que lo precedieron. Por último y luego de años de conflictos internos en cada partido y de una fuerte radicalización bipartidista que generó olas históricas de violencia, se selló el acuerdo del Frente Nacional, cuyo fin fue la alternancia en el poder como medio de superación de la Violencia.

**Palabras clave:** Colombia, partidos políticos, Violencia, Frente Nacional.

## **Dedicatoria**

*Este trabajo está dedicado a las personas que me animaron para consolidarlo: mi familia, Roberto A. y María N., sin su insistencia, apoyo y palabras de aliento, esto nunca hubiera tenido un punto final.*

[www.bdigital.ula.ve](http://www.bdigital.ula.ve)

## AGRADECIMIENTOS

Son muchas las personas que nos inspiran, pero no son tantas las que nos animan permanentemente y nos acompañan en los momentos de poco entusiasmo, en esos instantes en los que la hoja en blanco nos causa temor, cuando se nos escabullen las ideas y debemos empezar de nuevo, por eso quiero agradecer a mi madre por estar conmigo siempre, por sus palabras de consuelo, a Roberto porque le ha dado horizonte a mi formación académica y ha sido mi amigo incondicional a pesar de ser, invariablemente, quien debe leer mis borradores. También, a mi tutora, profesora Nohelia Parra, por mostrarme que la ciencia política es fundamental para entender el comportamiento del ser humano y el destino de cualquier país, además por contagiarme de su forma de ver la vida, ¡siempre tan disciplinada!

Del mismo modo, debo agradecer al cuerpo profesoral y administrativo del Cepsal especialmente, a la Dra. Dora Carrero, por darme la oportunidad de concluir con mi trabajo de maestría, también por sus consejos y buena voluntad. Y, finalmente debo reconocer que tengo una deuda enorme con la Universidad de los Andes que me abrió sus puertas para darle forma al sueño de ser Magister en *ciencias políticas*, sabré llevar en alto el nombre de tan reconocido centro académico.

## ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I.....	4
CONFIGURACIÓN DE LOS IDEALES POLÍTICOS: UN RECuento BREVE DE LA HEGEMONÍA CONSERVADORA: 1886-1930 .....	4
Primeras tres décadas del siglo XX: la danza de los millones .....	8
Fin de la Hegemonía conservadora y posicionamiento del Partido Liberal.....	16
CAPÍTULO II .....	21
PRESUNCIÓN DE CAMBIO: LA REPÚBLICA LIBERAL Y LA CONSOLIDACIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LA VIOLENCIA (1930-1946) .....	21
El Presidente Olaya y los focos diferenciados de la violencia.....	22
La Revolución en Marcha .....	31
CAPÍTULO III.....	41
“LA VIOLENCIA” Y ACUERDO DEL FRENTE NACIONAL (1946-1974) .....	41
Jorge Eliécer Gaitán: populismo y violencia.....	43
La Violencia: guerra civil y dictadura militar (1946-1965).....	49
El acuerdo del Frente Nacional (1958- 1974) .....	62
CONCLUSIÓN.....	70
BIBLIOGRAFÍA .....	74

## INTRODUCCIÓN

Una de las épocas más referenciadas en la historia de Colombia se ubica a mediados del siglo XX puesto que es uno de los periodos de más agitación del sistema bipartidista que cimentó la contienda política en un ambiente de hostilidad y cruenta violencia ocasionando deterioro del Estado de derecho, polarización de las instituciones, muerte de civiles enfrentados por ideales partidistas, desplazamientos forzado y la configuración de distintos grupos armados y guerrilleros. Precisamente, aproximarse al análisis del comportamiento complejo en medio de conflictos y alianzas transitorias de los dos partidos políticos tradicionales: liberal y conservador, en este lapso, es indispensable si se quiere entender la manera en que las decisiones de los representantes y los eventos políticos definieron el futuro del país que se ha estructurado en medio de la beligerancia.

El sistema político colombiano del siglo XX fue en sus primeras seis décadas un agente que promovía la separación ideológica de la sociedad, dado que se era *liberal* o *conservador* y esto obligaba a la filiación y defensa de las ideas del partido que por lo general eran asumidas desde la obligatoriedad de la tradición, de hecho, en sus fuerzas reaccionarias de defensa se crearon las guerrillas liberales y los *chulavitas* o pájaros que salvaguardaban los ideales conservadores, el resultado de la confrontación aparte del desplazamiento y el recrudecimiento de la violencia interna, se evidenció en las 174.056 muertes

entre los años 1946- 1957 según los datos de Henderson (2006) del periodo conocido como la *Violencia*.

Este comportamiento combativo se puede entender de manera compleja: desde la perspectiva de hacerse al poder y retenerlo enfatizando las ideas y enfoques que ostentaban los partidos y más aún la relación entre la sociedad y el Estado, pero, sobre todo, desde el papel que se creía debía desempeñar este último. Ware (2004) analiza los sistemas políticos y hace un apartado sobre el bipartidismo, sobre este insiste que es:

Único ejemplo de un sistema de partidos en el que aparentemente no existen otros incentivos para un partido que no sea el de competir con su oponente: no existen oportunidades para la cooperación formal o informal con otros partidos. El bipartidismo es uno de los ejemplos de lo que en teoría de juegos se denominaría estricta competición suma cero. Cada voto perdido por el partido contrario beneficia a su propio partido (p. 247).

Hacer un análisis minucioso del comportamiento que desplegaron los diferentes agentes de la época y de los acontecimientos más importantes de la *Violencia* fratricida es un trabajo de largo aliento, como lo es también examinar las intrincadas estrategias del sistema bipartidista que, a pesar de su sangrienta historia, pudo mantenerse en el poder bajo la bandera de la democracia; de hecho, por un largo tiempo los partidos políticos colombianos lucieron el título de los más antiguos de América Latina (constituidos a mediados del siglo XIX y sin aceptar tercerías hasta la constituyente de 1991). Sin embargo, lo que no se escapa a los fines de este trabajo es aproximarse de manera sucinta a examinar por un lado, las implicaciones del en el pacto de Sitges, que fue firmado en España por los dos representantes del bipartidismo: Alberto Lleras

Camargo y Laureano Gómez en 1956 para derrocar al General Rojas Pinilla, recuperar el poder y turnarse la presidencia durante el Frente Nacional y de otro lado, las implicaciones políticas de este pacto, lo que representó para las Instituciones, la democracia y la pacificación del país.

De este modo, este trabajo estará dividido de la siguiente manera; la primera parte de este trabajo se plantea un breve recuento histórico de la configuración de los ideales político-partidistas del país a partir de 1886, al tiempo que analizará el período de hegemonía conservadora en el país. El segundo capítulo tiene a bien estudiar la República Liberal, las agitaciones bipartidistas y las condiciones políticas e institucionales que precedieron al período de *la Violencia*. La última sección de la investigación se propone examinar la época de la Violencia que inicia a partir de 1948, mediante el análisis de los personajes y situaciones más relevantes del transcurrir político tanto del partido liberal como del conservador de la época. Finalmente, en esta parte se examinarán los puntos del acuerdo que dieron como resultado el Frente Nacional y el debilitamiento de la democracia y de los partidos políticos como la derivación más evidente de su implementación.



## CAPÍTULO I

### CONFIGURACIÓN DE LOS IDEALES POLÍTICOS: UN RECUENTO BREVE DE LA HEGEMONÍA CONSERVADORA: 1886-1930

Para hablar sobre la Violencia en Colombia es necesario recordar que, acerca de los sucesos que la desencadenaron, no existe un acuerdo entre los analistas de este periodo, dado que algunos sitúan la muerte de Jorge Eliécer Gaitán como el detonante más fuerte de la violencia fratricida, pues él fue el líder popular más visible que abanderó las reivindicaciones sociales de la clase obrera de la época. Sin embargo, para otros historiadores este acontecimiento acaecido en 1948, si bien tuvo profundas implicaciones en el aumento de la contienda partidista, porque dio lugar a un levantamiento popular conocido como el *Bogotazo*, apenas fue una consecuencia de lo que ya era común en la lucha por consolidar el centralismo y articular a este la fragmentación del poder político de las regiones, los entornos rurales y las poblaciones más marginales del país. En otras palabras, desde esta última perspectiva los sucesos de 1948 no son el comienzo sino más bien la continuación de una serie de hechos violentos en los que se evidenciaba un abuso violento del poder destinado a incrementar el sectarismo partidista y el mantenimiento en el poder del partido Conservador.

González (2014) llama la atención sobre la forma en que en el siglo XIX las clases dominantes que se encargaron de dirigir políticamente la Nación luego de la Independencia, se encontraron con obstáculos para ejercer una “centralización política” e integrar la población de todo el territorio colombiano puesto que su fragmentación era evidente, debido a la difícil geografía del país y al resultado de

la configuración de la Colonia que había tenido como base las zonas andinas que eran las de mayor población, situación que había dejado como resultado una red de “pequeñas y medianas ciudades con sus entornos rurales de haciendas y fincas campesinas” (p. 179) y fue precisamente en este contexto donde los partidos políticos tradicionales hicieron su aparición con un estilo político de corte personalista como articuladores de las regiones y el Estado central. El país era, así, desde la Colonia, una nación dispersa con pequeños poderes locales, basados en la concentración de la tierra en pocas manos, con muy precarias vías de comunicación y con una remota participación del Estado, incapaz de llevar obras de infraestructura a lo largo y ancho del territorio e incluso incapaz de tener un efectivo control monopólico del uso de la fuerza.

Estos acontecimientos evidencian la honda fragmentación del territorio, cuyo entramado de pequeñas y medianas ciudades, con sus entornos rurales de haciendas y fincas campesinas, constituye el escenario donde surgen los partidos políticos tradicionales colombianos, el Conservador y el Liberal, como coaliciones de grupos oligárquicos que competían por el poder en las localidades, basados en redes de pequeñas y medianas ciudades y villas, apoyadas a su vez en un *hinterland* rural de haciendas con sus respectivos peones y aparceros, junto con pequeños y medianos campesinos, ligados a los hacendados por lazos clientelistas. (González, 2014, p.179)

Básicamente, desde la forma en que los partidos políticos irrumpen en la vida de las localidades, regiones y en la política nacional, se va a marcar desde el inicio una postura beligerante, no sólo por el dominio del poder en las regiones, la necesidad de inhabilitar los grupos o facciones que buscaban hacerse al poder hegemónico, sino también, en la medida en que los partidos asumieron las tensiones de vieja data entre las familias por el reconocimiento, el prestigio o el *status* social. Circunstancia que trajo como consecuencia la incubación de los

odios en las guerras civiles a lo largo del siglo XIX ya que, en el intento de articular las regiones al Estado central, se ejerció, por un lado, un patronazgo marcado en la lealtad de las élites y, por otro, la subordinación de la población, que en su gran mayoría eran campesinos sujetos a altas tasas de analfabetismo, excluidos de la vida política, padeciendo pobreza extrema y dependientes de una agricultura técnicamente arcaica.

En un esfuerzo por reformar el espectro de la política, fortalecer las instituciones y poner al país de cara al desarrollo moderno, las burocracias concibieron como función del Estado central sacar de alguna manera al país del atraso y solidificar la sociedad en condiciones democráticas estables, no obstante, para los intelectuales de la época se hizo evidente la dualidad colombiana de condiciones contrapuestas: un sector “moderno” caracterizado, de un lado, por instituciones democráticas y legislaciones copiadas de las experiencias de países desarrollados y Estados consolidados y, de otro lado, un sector “atrasado”, caracterizado por las relaciones de cara a cara a los poderes de corte *gamonalicio* (término que se usa en referencia a los poderes rurales) y clientelista (González, p. 183).

Bajo tales criterios los principios programáticos de los partidos políticos son de difícil cumplimiento, como lo es también llevar a cabo el régimen centralista adoptado por la Constitución de 1886 y la aceptación, por parte de los liberales más radicales, del Concordato de 1887 que dotaba a la Iglesia Católica de un poder político y gubernamental, y este era aprovechado desde diferentes ámbitos, siendo uno de los más importantes el control sobre la educación que a todas luces

debía ser de orientación católica; por ejemplo, en los artículos 12 y 13 del convenio se establece que en los centros de enseñanza (universidades, colegios, escuelas, etc.) la educación e instrucción pública se dirigirá en conformidad con los dogmas y la moral de la religión católica, además, los jerarcas de la Iglesia inspeccionarán los textos y el gobierno deberá impedir que en el desempeño de las asignaturas literarias, científicas, entre otras, se propaguen ideas contrarias al dogma católico y al respeto y veneración de la Iglesia (Biblioteca Virtual del Banco de la República, s.f.).

El papel de preeminencia de la Iglesia Católica y la defensa de la moral cristiana también fue salvaguardado en los estatutos fundantes del partido conservador en 1849 que propendía por el mantenimiento del orden social jerarquizado, consolidado desde la Colonia; así, un punto sobresaliente del programa es el reconocimiento a “la moralidad del cristianismo y sus doctrinas civilizadoras contra la inmoralidad y las doctrinas corruptas del materialismo y el ateísmo” (Roll, 2003, p.197, citado en Alcántara y Freidenberg, 2003).

Aunque los principios programáticos de los partidos estaban ampliamente establecidos no era así su aceptación interna dado que intrínsecamente se encontraban permeados por dos tendencias: el Partido Conservador estaba franqueado por los *nacionalistas* que, en figura de personajes como Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, conformaban un gobierno excluyente que acometía contra los derechos individuales como estrategia para contener la oposición y, de otro lado, estaban los *históricos* quienes promovían un acercamiento con los liberales; en el Partido Liberal las tendencias estaban organizadas alrededor de los

*pacifistas* (quienes deseaban agotar las instancias políticas para llegar al poder) y la juventud liberal que defendía la lucha armada para desplazar el régimen conservador. En medio del descontento por el fracaso de las reformas por estabilizar e integrar al país a finales del 1899 se declara la insurrección liberal encabezada por Paulo Emilio Villar, un jefe liberal de la región de Santander que, por su cercanía con Venezuela, favorecía el ingreso de armas para las guerrillas liberales. Esta guerra civil se conoció como la “Batalla de los mil días” y cerró el siglo XIX con un país azotado por la confrontación partidista y dio inicio al siglo XX con un saldo de cerca de cien mil colombianos asesinados (González, 2014, p.p. 213-215).

### **Primeras tres décadas del siglo XX: la danza de los millones**

El cambio de siglo trajo consigo importantes transformaciones debido a que el café se posicionó en el mercado internacional y los réditos de su comercialización dinamizaron la economía nacional en los primeros decenios, permitiendo subsanar, inicialmente, la crisis fiscal que habían dejado las guerras civiles del siglo anterior, y luego, bajo la presidencia del conservador Pedro Nel Ospina (1922-1926), consintiendo una reforma institucional para el manejo de la economía por medio de la creación del Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República. Así, el mandato de Ospina materializó el paso de la sociedad típicamente agraria del siglo anterior a una relativamente más industrializada.

Al lapso entre 1922 y 1928 se le llamó *la danza de los millones* pues fue la época en la que ingresó una gran cantidad de dinero al país a causa de la

bonanza cafetera, la indemnización de Estados Unidos por la separación de Panamá y los empréstitos extranjeros; tal eventualidad obligó finalmente a la modernización del país en todos sus aspectos, siendo el sistema ferroviario el más beneficiado pues se pasó de 900 kilómetros de línea férrea a 1.500, acontecimiento que permitió avances en la integración física del territorio nacional como consecuencia de la mejora en la infraestructura del transporte, a pesar de que estuviera destinada inicialmente a la exportación cafetera.

Henderson (2006) plasma una imagen de estos acontecimientos coyunturales:

Para 1928, la riqueza anual del gobierno alcanzó su punto más alto; los dineros provenientes de las exportaciones de café, que ascendían a 88 millones de pesos, excedieron todos los ingresos del gobierno —incluyendo los empréstitos extranjeros— cerca de 12 millones de pesos. Los ingresos provenientes del petróleo y de las exportaciones de banano produjeron 34 millones de pesos adicionales. Colombia, para mediados de 1920, estaba inundada de dinero. Esto no significa que el país o su población fuesen ricos en términos absolutos, pero sí en un sentido relativo (p. 172).

El desarrollo en las obras públicas fue paralelo a la urgencia de modernizar y urbanizar al país que para entonces contaba con apenas algunas ciudades grandes: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Estos centros urbanos, con su naciente industria, generaron atractivas fuentes de empleo para los campesinos pobres que migraron a trabajar en las nuevas fábricas, el comercio o la construcción. De esta manera se triplicó la población en menos de treinta años prolongando la necesidad de ampliar la infraestructura, los servicios públicos, mejorar la salud y la oferta cultural y de educación.

En igual medida la clase alta modificó sus dinámicas debido al flujo de capital, que usó para acrecentar la brecha entre la élite y los sectores populares; por ejemplo, en Bogotá se inauguraron clubes exclusivos como el *Country* y el *Jockey*, destinados a las reuniones sociales y al esparcimiento de las minorías privilegiadas: allí se jugaba *tennis*, *foot-ball*, *golf* y polo, “actividades a las que se referían en sus denominaciones en inglés, reflejo de lo incipientes que todavía eran los círculos elitistas, pero también del esnobismo de esos mismos sectores” (Arias, 2011, p.26). Una suerte muy distinta acompañaba a los menos privilegiados, al pueblo que se reunía en las *chicherías*<sup>1</sup> lugares a los que se iba a socializar, que tenían por sí mismos una identidad popular y en los que se hacía conspiración política, dado que allí convergía toda clase de personas que ya ostentaban un descontento constante: obreros, artesanos, desempleados, campesinos de migración reciente, etc.

Sobre la base de esta polarización se fue incubando en el campo y en la ciudad un germen de estallido social contra las condiciones bajo las cuales era tratado el sector menos beneficiado de esta segmentación social. En la ruralidad, los colonos (quienes habían ampliado la frontera agrícola) y los campesinos (aparceros y jornaleros, muchos de ellos descendientes de indígenas) se enfrentan por la tierra con los latifundistas, quienes se habían apoderado de sectores importantes de los territorios rurales, controlaban las condiciones de la mano de obra y contaban con el apoyo de las autoridades locales. Tales condiciones les habían permitido desde hacía tiempo intimidar al colono para que

---

<sup>1</sup> Expendios de bebidas populares de maíz fermentado.

este abandonara la tierra y de este modo concentrar grandes cantidades de terreno en pocas manos.

En los años veinte, los colonos lograron dotarse de una mejor organización, gracias a sus contactos con el mundo laboral urbano, como lo señala Arias:

[...] Más unidos y más politizados, para mejorar su situación recurrieron a diversas estrategias: creación de ligas campesinas, ocupación de tierras, insurrecciones, alianzas con los partidos de izquierda y, en ocasiones, con algunos grupos indígenas del sur del país que, bajo el liderazgo de Quintín Lame, también intentaban darles una mayor coordinación a sus luchas. (p.31)

Sin embargo, esta problemática se agudizó con la caída de los precios del café a finales de 1928 y con la gran crisis del 1929 que fueron los responsables de una alta tasa de desempleo pues los trabajadores de las obras públicas se enfrentaron a la interrupción de sus actividades y los campesinos a la reducción de los salarios. Frente a dicha situación el gobierno alentó a los desempleados a regresar al campo con la consecuencia del aumento de las tensiones rurales pues los campesinos que habían salido en busca de mejores condiciones de vida y retornaron convertidos en obreros ahora se negaban a aceptar las condiciones disímiles de su labor en las haciendas. Así, el regreso de los migrantes al campo empeoró la situación de los agentes en conflicto en la zona rural:

Indios, arrendatarios y colonos buscaban liberarse de los grandes hacendados para convertirse en propietarios independientes. Por su parte, los arrendatarios luchaban por mejorar sus contratos de trabajo y poder sembrar café en sus parcelas, lo cual les otorgaba independencia y seguridad en la posesión. Mientras tanto los campesinos invadían las nuevas haciendas pues alegaban que eran producto de la usurpación de baldíos en las regiones de frontera, en tanto que los indígenas buscaban que se les devolvieran sus tierras comunales (González, 2014, p.p. 230-231)



Con el auge de las ideas del recién creado Partido Socialista Revolucionario (1926) y luego del Partido Comunista (1930) se configuró, en gran medida, la base política de las reclamaciones de los grupos que ya habían usado, desde el inicio de siglo, el sindicalismo y la huelga como elementos de presión para denunciar las condiciones bajo las cuales se encontraban como trabajadores. En este escenario, se pretendió establecer una fuerza política al margen de los partidos tradicionales, que para ese entonces se encontraban inmersos en una estrategia de Unión Republicana debido a la bonanza económica de inicios del siglo, de modo que el accionar de la clase obrera y del proletariado fueron percibidos como un desafío a la base de la autoridad tradicional: los ideales del conservatismo y la Iglesia Católica.

Es necesario resaltar que la clase política consideró, desde el inicio, que la protesta social se debía a la influencia de ideas extranjeras como las que traía el triunfo de las revoluciones mexicana y bolchevique y de este modo no legitimó como válidas las denuncias de precariedad en las condiciones laborales y sociales de la clase trabajadora, que ya habían sido superadas, por ejemplo, en Europa, con los cambios derivados de la revolución industrial. De este modo, los trabajadores estaban sometidos a distintos tipos de explotación:

[...] las jornadas laborales no tenían un límite claramente establecido, así que se podían extender durante doce horas; niños, mujeres y ancianos estaban tan expuestos a las arbitrariedades de sus patronos como los hombres jóvenes; las condiciones sanitarias y alimenticias, el hacinamiento, comprometían la salud del trabajador; si bien existía un salario los montos eran establecidos unilateralmente por los empresarios y, en no pocas ocasiones, la remuneración monetarizada era sustituida por el pago en bonos y la obligación de intercambiarlos por los productos que vendían las tiendas de la empresa. (Arias, 2011, p. 32)

Para hacer frente a la agitación social, los conservadores acudieron a deslegitimar las acciones de los rebeldes por medio de una legislación laboral que aceptaba métodos represivos como despidos, persecuciones, arrestos y el remplazo de los huelguistas en los puestos de trabajo. En esta labor, la Iglesia también jugó un papel preponderante, intentando desmeritar la imagen del obrero por sus pretensiones que consideró abusivas y contrarias a la armonía social. Desde entonces, se consideró al trabajador urbano como un ser proclive al juego, la bebida, la promiscuidad sexual y la rebelión, tales defectos debían ser contenidos infundiéndole los sanos valores de la fe que eran divulgados en las homilías, los artículos de prensa de la época y en la educación pública.

Otra idea fundamental que acuñó la clase política y fue útil para sus intenciones de dominación, fue el debate que concibieron los intelectuales del sur del continente con el cual aspiraban a explicar el rezago de sus países frente a los europeos y que determinó que la raza era la clave para entender el atraso de los pueblos. En términos generales, el prejuicio sustentaba la polarización de clases, siempre en detrimento de los pobres, que por lo general poseían rasgos visibles de su herencia indígena o africana y con ello una menor estatura o un color de piel más oscuro; de otro lado estaban los colombianos que tenían dinero y que visiblemente eran más altos, rubios y de tez blanca, gracias a la herencia de sus antepasados europeos. “Durante la década del veinte los colombianos mejor educados creían que los pueblos de piel oscura en todo el mundo sufrían un proceso de “decadencia racial” convicción que tendía a impedir el impulso reformador” (Henderson, 2006, p. 224).

Dicho de otra manera, al obrero no sólo se le desconocían sus requerimientos, sino que se le deslegitimizaban políticamente por las consideraciones de origen racial y de condición social y eran cohesionados desde el gobierno nacional que sostenía opiniones atávicas acerca del merecimiento de los pobres frente a las situaciones que debían atravesar a diario. Arias describe cómo el conservador Laureano Gómez, en una conferencia celebrada en el teatro municipal de Bogotá en 1928, resume las ideas ampliamente aceptadas por el bipartidismo: “nuestra raza proviene de la mezcla de españoles, de indios y de negros. Los dos últimos caudales de herencia son estigmas de completa inferioridad” (p. 41). Otro ejemplo claro de la línea de pensamiento del conservatismo, la sostuvo el ministro de industria José Antonio Montalvo quien, a finales de 1928, estaba encargado de las relaciones laborales; él pensaba que, “sí se concedía un aumento salarial a los trabajadores, ellos los emplearían en pasatiempos disolutos” (Henderson, 2006, p. 225).

Bajo este contexto, la clase obrera ejerció una lucha sin cuartel animada por los ideales revolucionarios que ya habían dado fruto en otros países y alentados por la necesidad de reformas en contra del autoritarismo, la arbitrariedad y la estigmatización, que en este caso no sólo era proyectada por la clase dirigente sino también por las políticas laborales de las compañías extranjeras como la *Tropical Oil Company* y la *UnitedFruit*, y se lanzaron a la huelga con tintes de revuelta social (que no siempre se hizo en condiciones pacíficas) como medidas de presión para conseguir el reconocimiento de su papel como trabajadores bajo condiciones más dignas. Muestra de lo anterior fueron las 32 huelgas que

ocurrieron durante 1920 a lo largo del territorio nacional. Sin embargo, la respuesta del Estado fue reprimir las protestas y favorecer las políticas económicas de las compañías extranjeras pese a la pérdida de soberanía que dicha decisión ocasionó.

Un buen ejemplo de la laxitud del Estado ante el gran capital fue la huelga obrera de la *Tropical Oil Co.* en 1924, para reclamar por mejores salarios. Los trabajadores no solo fueron reprimidos, sino que gobierno autorizó el despedido de 1.200 de ellos. Luego, en 1925, ante otra huelga en la misma compañía, en la cual se paralizó el trabajo de 5.000 trabajadores, el gobierno nuevamente respaldó a la *Tropical* y, lejos de concertar, la policía disparó contra los huelguistas, episodio en el cual murieron dos de ellos. Seguidamente se declaró el estado de sitio y se encarceló a los huelguistas (González y Molinares, 2013).

La “Masacre de las bananeras” fue otro de los sucesos reprochables de abuso del poder de la fuerza pública al que acudía constantemente el oficialismo con miras a mantener el *statu quo*. En 1928 en Magdalena los campesinos que trabajaban para la *UnitedFruit Company* le solicitaban a la compañía y al gobierno principalmente la abolición del sistema de contratistas, el aumento general de los salarios, el descanso dominical remunerado, la indemnización por accidente y la construcción de viviendas dignas para los obreros, peticiones que fueron desconocidas por la compañía que solicitó al gobierno de Miguel Abadía (1926-1930) parar la huelga. El presidente, que estaba seriamente intranquilo por las “amenazas de la revolución”, respondió enviando unidades del ejército al mando

del General Cortés para levantar la huelga que por entonces ya contaba con más de un mes. A la madrugada del 6 de diciembre, Cortés desplegó casi trescientos soldados contra los huelguistas que acampaban cerca a la estación del tren “ordenó a la muchedumbre que se dispersara, dándole tres minutos para hacerlo. Cuando la multitud, entre la cual se encontraban muchas personas dormidas, se negó a moverse, el general Cortés ordenó a sus tropas abrir fuego” (Henderson, 2006, p. 241). El número de muertos de ese suceso es incierto, de acuerdo con el general Cortés apenas fueron 9, el embajador norteamericano de la época admitió que la cifra podía llegar a 1.000, el dirigente Sindical Alberto Castrillón afirmó que la cifra ascendía a 5.000 muertos (Henderson, p. 243).

### **Fin de la Hegemonía conservadora y posicionamiento del Partido Liberal**

[www.bdigital.ula.ve](http://www.bdigital.ula.ve)

La forma en que el gobierno conservador asumió el suceso de las bananeras, tuvo un costo político inmenso para el partido pues el presidente exoneró al general Cortés de la responsabilidad de las muertes y continuo del lado de la empresa privada, así, la población en general, entendió que con el gobierno conservador no se conseguiría ninguna mejora frente a las medidas laborales que ya habían sido instauradas. El descontento generalizado de la población fue materializado por el partido liberal que supo capitalizar la filiación de los simpatizantes del ya desdibujado partido socialista, que había sido objeto de persecución y aprehensión de sus líderes. De este modo, los liberales visibilizaron sus ideales políticos abanderando la casusa de la izquierda, el proletariado, y del movimiento obrero, en contra de las leyes laborales

inequitativas que habían sido pensadas por el capricho de las compañías extranjeras y aceptadas por una clase dirigente, al parecer, apática al bienestar social. Si bien, el partido liberal era portador de una representación minoritaria en el gobierno aún gozaba de alguna credibilidad política, por eso cuando en cabeza de Jorge Eliecer Gaitán se investigó el suceso de las bananeras y se denunció posteriormente, casi un año después, en septiembre de 1929, los actos de sevicia del General Cortés y sus tropas, en el parlamento, se entró en un debate histórico por la responsabilidad del gobierno en cuanto a las vidas que habían tomado impunemente.

Gaitán demostró en su debate la grave situación de explotación a que eran sometidos los obreros de la zona bananera por la *UnitedFruit Company*; demostró la corruptela en el departamento propiciada por esa compañía frutera, que en la práctica gobernaba los destinos del Magdalena; aclaró que los trabajadores no habían dado ningún motivo para que se disparara contra ellos, y probó a todas luces que la represión contra los huelguistas del Magdalena había generado una masacre y que el número de trabajadores muertos por las balas oficiales en Ciénaga, Aracataca y Sevilla alcanzó, por lo menos, a trescientos (Biblioteca Virtual del Banco de la República, s.f.).

Además de esta grave situación política, los dos últimos años de la presidencia de Abadía estuvieron enmarcados por una crisis económica de difícil solución: a partir de 1928 los prestamistas extranjeros suspendieron el crédito hacia Colombia debido al evidente despilfarro en las épocas de bonanza; los precios del café cayeron en 1929 poco más que a la mitad de lo que se vendía el

año anterior. Para finales del mandato de Abadía el pronóstico era desesperanzador “los precios de los bonos colombianos en la bolsa de Nueva York cayeron constantemente, perdiendo el 20% de su valor entre 1927 y fines de 1929. Casi un año antes de la quiebra de la bolsa de valores, en octubre de 1929, el director del diario, Eduardo Santos, advirtió que Colombia se hallaba en un estado de crisis económica” (Henderson, 2006, p. 243).

A pesar de toda la adversidad, a mediados del 1929 el gobierno de Abadía tuvo que soportar otro suceso demoledor del que, ahora sí, fue imposible recuperarse. El 6 y 7 de junio salieron a protestar los estudiantes que simpatizaban con el alcalde de Bogotá que fue destituido de su cargo a consecuencia de haber despedido al director de la lucrativa compañía del tranvía de Bogotá, por acusaciones de robo. Era por todos conocido que esta acusación tenía fundamentos sólidos pues desde hace algún tiempo los recursos públicos estaban siendo dilapidados por personas que se aprovechaban de su cercanía con el presidente. En medio de la protesta estudiantil, el 6 de junio, la policía a cargo del general Cortés Vargas, disparó sobre la muchedumbre dando muerte al estudiante Gonzalo Bravo Pérez. Ante la situación, miles de personas se unieron al pedido de que se debían juzgar a los responsables. No sólo le pidieron a Abadía la renuncia del jefe de la policía, también del ministro de obras públicas y del ministro de guerra, el presidente no tuvo otro camino que aceptar las peticiones, resolviendo así, no sólo las peticiones de los estudiantes sino consumando de manera definitiva la altivez del su mandato. Henderson resume este momento definitivo: “Con la salida de Rengifo y Hernández, caracterizados como “la

columna vertebral de régimen”, el gobierno de Abadía se encontró a la deriva y jamás se recuperó” (p. 246).

A pesar de lo anterior, lo que va a determinar la conclusión de la hegemonía conservadora es la doble candidatura del partido en las próximas elecciones y el apoyo dividido de la iglesia a los candidatos. Por un lado, estaba Alfredo Vásquez Cobo quien había recibido cuatro años antes el apoyo del Arzobispo Herrera Restrepo, un clérigo con gran influencia en el partido conservador y bastante astucia política, sin embargo, después de su muerte, estos deseos ya no fueron reconocidos de manera tácita porque su sucesor Ismael Perdomo, era menos influyente; además, el Presidente Abadía no apoyaba la candidatura de Vásquez. De otro lado, estaba Guillermo Valencia quien apoyado por Abadía no quiso renunciar a las intenciones de ganar las elecciones. En este punto el Vaticano le ordenó al Arzobispo Perdomo apoyar a Valencia, dos semanas antes de las elecciones, pero muchos sacerdotes desconfiaban del candidato por sus viejas alianzas con los liberales, además de su vida disoluta. Finalmente, en las elecciones del 9 de febrero el voto conservador quedó dividido y ganó el liberal Olaya Herrera por una gran diferencia 396.934 votos; Valencia, 240.360 y Vásquez Cobo 213.583 (Henderson, 2006, p.p. 253 – 254).

El cambio de gobierno deja abierta la posibilidad de nuevas discusiones que debe asumir el próximo presidente frente a la renovación de la política colombiana, la injerencia de la iglesia en los asuntos del Estado, el papel de la mujer, la respuesta a las peticiones de los trabajadores, la reforma agraria, etc., temas que son indispensables para mejorar las condiciones políticas, económicas y sociales



en el país. Sin embargo, no se puede desconocer el aporte del gobierno conservador a la innovación del país, sobre todo, a partir de los años veinte, con la mejora de las vías de comunicación, el impulso a la industria y el intento de modernización de las ciudades mejorando los servicios públicos y las vías de acceso. Aunque, estos adelantos fueron modestos, permitieron que la sociedad colombiana se incrustara en un proceso de cambio irreversible, y que se dejara permear por las ideas que venían de otros lugares del mundo en relación al cuestionamiento que se le debía hacer a las estructuras del poder.

[www.bdigital.ula.ve](http://www.bdigital.ula.ve)

## CAPÍTULO II

### **PRESUNCIÓN DE CAMBIO: LA REPÚBLICA LIBERAL Y LA CONSOLIDACIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LA VIOLENCIA (1930-1946)**

A partir de 1930 empiezan los 16 años de administración del Partido Liberal en la Presidencia de la República de Colombia, un periodo que se conoce como la “Hegemonía liberal” al que se llega gracias al desgaste de los representantes del Partido Conservador en el gobierno, sus políticas de despilfarro del empréstito extranjero obtenido tras la pérdida del territorio panameño, la forma en la que respondieron a las revueltas populares y a la división interna del partido; de ahí que los liberales se catapultaran como la opción de cambio que necesitaba el país. La elección democrática del presidente y su consecuente transición pacífica del poder, en ese momento histórico, en el que en América Latina se instalaron dictaduras militares y en algunos países de Europa como Alemania e Italia surgió el fascismo, fue tranquilizante para los dos partidos tradicionales debido a que el presidente Enrique Olaya Herrera eligió un gabinete de Unidad Nacional para compartir el poder con los conservadores. Sin embargo, por cuenta de la presunción de cambio de las políticas reformistas de los liberales, su postura frente a la Iglesia y el posicionamiento de los nuevos dirigentes en las regiones, la tranquilidad duró poco y la sociedad colombiana se fue polarizando aún más, sobre todo en los territorios campesinos en donde la presencia del clero era bastante marcada y la aceptación de las políticas conservadoras eran inquebrantables con respecto a la religión, para luego adentrarse en una trágica guerra civil que

tuvo consecuencias disímiles en todo el territorio nacional a lo largo de los siguientes 20 años y que terminó por socavar el papel del Estado, la administración de justicia y repercutir en el valor mismo de la democracia.

## **El Presidente Olaya y los focos diferenciados de la violencia**

Al inicio del mandato del Presidente gozaba de una amplia simpatía por parte de los conservadores, debido a que en los últimos diez años había desempeñado cargos de representación en Estados Unidos y entre los cuales se incluía haber sido embajador en Washington en la última administración conservadora (Arias, 2011, p.58); debido a ello su postura frente a las políticas que de ahora en adelante iban a caracterizar su mandato no representaron un cambio radical en la administración del poder que, para su caso, fue compartido con la bancada opositora. Pero esto acarreó, como señala Arias, que se generara un completo descontento en los integrantes del Partido Liberal que “sentían frustradas sus esperanzas de cambio” (p. 58). Sin embargo, Roll (2003) muestra que esta primera administración buscaba modernizar políticamente al país reivindicando la condición ideológica del Partido con medidas que iban desde la ampliación del intervencionismo de Estado con el propósito de garantizar la igualdad de los hombres frente a la ley, y también, garantizar la libertad de acción sin que esto se convirtiera en un perjuicio en contra de la sociedad. Así:

[...] se consideraba necesario controlar las iniciativas individuales en aras del bien general, procurando hacer digna la vida de los ciudadanos. Además, se planteaba la necesidad de intentar establecer un equilibrio entre el individuo y la empresa mediante

la protección legal del trabajo. A éste se le consideraba la fuente primordial para la adquisición de la propiedad, que ante todo debía tener una función social. (Roll, 2003, p.181)

De las nuevas disposiciones gubernamentales en materia social, se beneficiaron los trabajadores con medidas aprobadas por el Presidente durante su primer año de mandato, dentro de las cuales estaba la Ley 83 de 1931 que protegía el derecho a la organización de sindicatos y penalizaba como delito civil la disolución forzada de los mismos (Henderson, 2006, p. 256). Posterior a esto, con otras leyes se estableció la obligatoriedad de las vacaciones remuneradas, el horario laboral de ocho horas al día y el pago de los domingos que debían ser libres. De igual forma, se intentó mejorar el status de la mujer eliminando la disposición jurídica que hasta entonces le impedía manejar sus bienes inmuebles una vez contrajera matrimonio.

En materia económica, el gobierno de Olaya se enmarcó bajo el colapso del comercio mundial a consecuencia de la Gran Depresión, que significó un terrible deterioro en las finanzas del país, motivo que conllevó la detención de las obras públicas que se estaban ejecutando por entonces y al despido de una cantidad importante de obreros que intentaron regresar al trabajo de la agricultura; sin embargo, esto no fue una solución viable debido a que los “salarios agrícolas habían caído de un 50 a un 60%” (Henderson, p. 255). El panorama en las ciudades también era de empobrecimiento pues muchas personas perdieron sus casas al no poder pagar las hipotecas. Como medida para enfrentar la crisis, Olaya aceptó las recomendaciones de Edward Kemmerer, reconocido economista de la Universidad de Princeton, quien

propuso un “plan financiero que combinaba la austeridad fiscal, un alza moderada de impuestos y ortodoxia económica” (Henderson, p. 255). En 1931 el congreso le dio la potestad al Presidente de interferir considerablemente en asuntos económicos; con la autoridad de su investidura derogó la ley que hasta ahora permitía la importación libre de impuestos de algunos alimentos, influyendo, además, en la sustitución de las importaciones y en el intento de estimular lo que pudiera producirse en el país:

Los intereses agrícolas y otros se beneficiaron con la creación de tres nuevas entidades crediticias, el Banco Central Hipotecario, la Caja Agraria y la Caja Colombiana de Ahorros, adicionalmente Olaya estimuló la expansión ulterior de la industria cafetera al ofrecer a los cultivadores una bonificación del 10% por nuevos cultivos. (Henderson, 2006, p. 256)

Todos estos adelantos en materia económica fueron el paliativo para resistir los embates de la Gran Depresión, no obstante, en otros temas definitivos el gobierno mantuvo la tendencia ya marcada por los conservadores, por ejemplo, en cuanto a la dependencia de los capitales extranjeros y a la apertura de políticas petroleras impuestas por Estados Unidos hubo un afianzamiento aún más notable. Otra tendencia continuista apuntó a la relación Estado-Iglesia: si bien los intereses del partido respaldaban la secularización del Estado, la libertad de culto y enseñanza, el Presidente prefirió mantener una relación cordial con la Iglesia velando porque el Concordato de 1887 siguiera cumpliéndose al pie de la letra. Sin embargo, esta actitud condescendiente no fue suficiente para apaciguar los ánimos retardatarios de los opositores que, como señala Arias, consideraban que “los pilares esenciales de la nación” estaban a punto de derrumbarse (p. 60). Las críticas también surgieron del

interior del liberalismo en el que existía una antigua división claramente marcada: una corriente que apoyaba al gobierno y que se entendía con los más pertinaces conservadores en los propósitos del Estado y la economía, mientras que la otra era la de la oposición que se canalizaba por medio de la disidencia que “utilizando un lenguaje de clase combaten, por encima de la identidad partidista, la política gubernamental e incluso el orden establecido representado por la otra corriente liberal, dinamizando así las luchas de las masas obreras y campesinas” (Sánchez y Meertens, 1983, p. 31).

Además, tal y como Sánchez y Meertens (1983) explican:

El partido liberal, en la persona de Olaya Herrera, asumió el poder [...] después de cincuenta años, durante los cuales la oposición liberal había adoptado simultáneamente contradictorias tendencias, cuyos extremos iban desde la conciliación permanente con el adversario, hasta la proclamación de la insurrección armada como única táctica para disputarle eficazmente el control del Estado. Esto le permitió recoger, con un sector del partido, el descontento de las masas populares, neutralizando la posibilidad de consolidación de partidos clasistas de cobertura nacional que compitieran con el bipartidismo secular, mientras que con la otra ala agitaba fórmulas de entendimiento con los grupos dominantes para garantizar la superación de la crisis sin mayores sobresaltos. (p. 30)

A pesar de la división que existía al interior de los partidos y la oposición que se le hizo al gobierno del presidente Olaya desde los dos bandos, hay que tener en cuenta que tales aspectos no fueron suficientes para desatar la oleada de violencia que surgió con el cambio de régimen político que inició en 1930 en los departamentos de Santander y Boyacá; por el contrario, fueron apenas algunas aristas de un fenómeno más complejo, que se relaciona con la organización del poder y la influencia del mismo en un país centralizado pero incapaz de vincular unidireccionalmente a todas las regiones en un mismo

propósito. Un primer indicio para descifrar las tramas del poder, es establecer con claridad que, en el sistema político colombiano de la época, el presidente era el encargado de nombrar a los gobernadores de los departamentos, además de los miembros de su gabinete; a su vez, los gobernadores designaban a los alcaldes, y estos últimos a los funcionarios de oficinas y dependencias, es decir que el sistema burocrático que dependía del presidente, se renovaba según la bancada partidista; de este modo, al subir Olaya y a pesar de su discurso de coalición, “era inevitable que, en la medida que los liberales asumieran posiciones claves (sic) dentro del gobierno, los cuerpos elegidos comenzaran a favorecerlos” (Henderson p. 260).

Partiendo de lo anterior, era irremediable que luego de la designación de los cargos ordenados por la presidencia, llegaran liberales a lugares que habían sido tradicionalmente conservadores, y que los conservadores reaccionaran al cambio de administración, y más aún, si algunos liberales “consideraban esta nueva situación [...] como una oportunidad de deshacer viejos entuertos” (Henderson, p. 264). Además, no se puede pasar por alto la forma en la que los departamentos, regiones, municipios se habían afiliado a uno u otro partido; Henderson hace hincapié en que, desde la creación de los partidos, los colombianos migraban por una u otra circunstancia a aquellos municipios en donde podían hacer parte de la mayoría política, situación que no hacía sino agravar los cambios del poder. Parte del mapa de la identidad política de Colombia en 1930 se vislumbraba así:

[...] el partido Liberal dominaba en la costa Atlántica, en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena. El Valle y los territorios de los Llanos Orientales [...]

eran en su mayor parte liberales. El conservatismo predominaba entre los piadosos antioqueños y entre la gente de Nariño. Huila, en la parte alta del Valle del Magdalena, era predominantemente conservador, mientras que Tolima, su vecino del norte, tendía a ser de mayoría liberal [...]. Santander del Norte era conservador, Santander era en su mayor parte liberal. La Cundinamarca rural era conservadora, y Bogotá, liberal. De hecho, todas las ciudades y pueblos más importantes de Colombia tendían a ser liberales. (Henderson, 2006, p.p. 264-265)

En el fondo, aunque era inminente la tendencia política en la estructura departamental, al interior de los municipios coexistían fragmentaciones partidistas en una evidente tensión política. Por ejemplo, en Boyacá se presentó una fuerte desarticulación entre los niveles y subniveles del poder a consecuencia del cambio burocrático: “el hecho del nombramiento de 88 alcaldes liberales, en un total de 101 municipios boyacenses, tenía que ser recibido como una amenaza y afrenta por parte de los notables conservadores de esas regiones” (González, 2006, p.252), que aferrados al poder crearon estrategias para deslegitimar la nueva burocracia. Bajo las circunstancias, los liberales reaccionaron a la hostilidad optando por una vieja medida: “crear un aparato parainstitucional de policía cívica para enfrentar el hecho de que su autoridad no fuese reconocida por la Policía municipal ni por la guardia departamental” (González, p.252). La “policía cívica” al no hallarse legalmente constituida, quedaba fuera de los mecanismos de control y esto le permitió abusos constantes del poder contra la población. Indudablemente, los conservadores respondieron con la misma estrategia de los liberales, alegando persecución y protección de su propia vida.

El segundo indicio esclarecedor del surgimiento de la violencia de los años 30 es la postura del clero y su vinculación con el poder; los sacerdotes se



habían acostumbrado a dirigir junto con los conservadores la suerte de las poblaciones como elemento de control social, por consiguiente, la llegada de los liberales significó una contienda inaplazable. Una vez operante la policía paraestatal, el clero se radicaliza cada vez más e invita a los feligreses a sacar a los liberales de algunas poblaciones y veredas, con argumentos en defensa de la identidad conservadora ligados a la religión. Finalmente, el gobierno central, en aras de resolver el problema, pretende limitar la influencia política de la Iglesia anunciando que expulsará a los sacerdotes extranjeros que participen en la agitación política y que castigará a los colombianos con todo el peso de la ley. A su vez, la autoridad eclesiástica también se pronuncia: “el Obispo de Tunja, el moderado, Eduardo Maldonado Calvo, prohíbe a su clero participar en la contienda electoral de mayo de 1931, cosa que indigna a los conservadores” (González, 2006, p.253); sobra decir que ni las amenazas del gobierno ni los llamados a la prudencia del Obispo fueron suficientes para detener el derramamiento de sangre en Boyacá.

De otro lado, al rastrear la violencia que se desató en el Departamento de Santander, se puede establecer que estos cruentos episodios se debieron a un asunto de revanchismo político de vieja data. En la distribución de los cargos de representación del Partido Liberal, el presidente Olaya asignó para el departamento de Santander a Alejandro Galvis, una personalidad conocida dentro del Partido debido a las denuncias que había erigido en la palestra pública contra el fraude electoral de los conservadores en ese mismo departamento. De este modo, su primera intención fue asegurar que en las

próximas elecciones (1931) los liberales obtuvieran las mayorías electorales, y para esto debía solucionar el problema del municipio de García Rovira, liberal por tradición y objeto de suspensión de sus derechos civiles desde 1885.

En su condición escarpada, García Rovira limitaba con la población de Capitanejo, que también era liberal, y este último con Boyacá, de tradición conservadora; para entonces, los electores debían hacer jornadas largas por los senderos montañosos para conseguir inscribirse en las listas electorales de las cabeceras municipales. Y para diciembre de 1930 los ánimos estaban caldeados, “los conservadores de los municipios cercanos a García Rovira estaban preparados para enfrentamientos cuando se dirigieron a sus respectivas sedes municipales” (Henderson, 2006, p.269) y esto fue finalmente lo que selló la tragedia: un grupo de campesinos conservadores se dirigieron a Capitanejo, lugar donde eran esperados por un fuerte grupo de liberales, entre ellos policía simpatizantes del gobernador Galvis. Henderson hace la cronología de este suceso: en el primer día hubo intercambio de palabras en la plaza principal, los liberales sacaron las armas e hicieron retroceder a los conservadores en medio de arengas y gritos. Al día siguiente, en la tarde, los disparos derribaron un gran número de hombres en la plaza en medio de un fuerte intercambio de disparos, los que sobrevivieron no pudieron hacer nada por sus amigos caídos, muchos se desangraron en donde se derrumbaron. (p. 270)

Los episodios que se presentaron en Boyacá y en Santander no fueron los únicos, en Montería la policía conservadora disparó a los electores liberales

y civiles conservadores incendiaron algunas casas de sus oponentes políticos. Para el primero de febrero ya había más de cien muertos a causa de las elecciones para las Asambleas Departamentales. “Para fines de 1931 y comienzos de 1932, García Rovira y las regiones adyacentes en Boyacá y Santander estaban sumidas en una guerra civil” (Henderson, 2006, p 272). La falta de institucionalidad y de resolución de estos brotes de violencia hicieron que muchas personas migraran a Venezuela para proteger su vida y que otros se desplazaran a otras regiones del país, llevando consigo apenas sus vidas y familias. La acción más catastrófica fue la creación de milicias en las zonas más afectadas; cada partido organizó su resistencia apoyado por personajes gubernamentales de alto rango; de hecho, se sabe que un sacerdote organizó una milicia para apoyar la causa conservadora y el obispo justificó la iniciativa aduciendo el derecho que tenía la Iglesia de proteger la vida de los conservadores que eran tratados como criminales (Henderson, p 273). El mismo autor también explica que:

Para mediados de 1932 era evidente que la violencia había sobrepasado la capacidad de Olaya Herrera de controlarla. Las milicias conservadoras estaban activas tanto en el oriente como en el occidente de Boyacá, y la pedrea contra el directorio conservador en Manizales, el 18 de junio, indicaba que la ilegalidad podía extenderse a la Cordillera Central. (p 273)

Curiosamente, en septiembre de 1932 se da una tregua en los enfrentamientos bipartidistas, esto bajo la necesidad de enfrentar a Perú, en una guerra que se inició por reclamación de límites y que duró hasta 1933. Con esta guerra se apaciguaron los ánimos revanchistas, de hecho, muchos jóvenes salieron de las zonas del conflicto reclutados por el ejército para cumplir su

deber con la patria. Finalmente, los liberales se consolidaron en el poder y en 1933 obtuvieron las mayorías en la Cámara de Representantes y en las asambleas departamentales.

## **La Revolución en Marcha**

Quien toma las riendas de la presidencia, luego de Olaya, es Alfonso López Pumarejo, elegido democráticamente para dos periodos (1934-1938; 1942-1945); él fue el depositario de los deseos de cambio que necesitaba el país para entrar definitivamente a la modernidad y bajo esta línea propuso reformas constitucionales no sólo en el ámbito de las instituciones políticas sino también de la relación Estado- Iglesia, los fines de la educación, la tributación y el problema agrario. Desde el comienzo de su gobierno, empleó un lenguaje innovador criticando las élites tradicionales, y este motivo fue el responsable de que gozara de la simpatía de las masas populares y de la izquierda. Arias (2011), hace un análisis de este período y sitúa como primera preocupación del presidente la superación del atraso apoyándose en la industria para mejorar la economía. Hacia los años treinta, ya se contaba con un “empresariado pujante y con mayores capitales” provenientes del café; con mejor infraestructura en vías y redes eléctricas, todo esto emparejado con una próspera demanda interna de productos, así la economía del país tendía a diversificarse al lado de los sectores tradicionales, además de las inversiones hacia el petróleo y la siderurgia (pp. 62- 63). Asimismo, el autor asevera que:

Para López Pumarejo, el atraso tecnológico y la falta de una mano de obra especializada explican, en buena medida, los escasos resultados de la industria

nacional. Por consiguiente, era imprescindible llenar esos vacíos si se quería aprovechar la riqueza del país. El desarrollo industrial implicaba entonces dirigir la mirada hacia el campo educativo. (p. 63)

En el momento en que López combina el proyecto económico con lo social y hace especial énfasis en la educación, el sistema educativo se distancia de los viejos preceptos de la educación confesional y pretende darle una concepción más liberal y conforme a las necesidades de un país que apunta al desarrollo social y cultural de la mano de la ciencia moderna. Así, determina que la educación primaria debe ser gratuita y, por demás, obligatoria y que la enseñanza verbalista debe ser superada debido a que siempre ha estado a cargo de una elite sabia educando a un pueblo ignorante. Se piensa también en el papel de la mujer, en su condición de igualdad y la necesidad de que ella también pueda ingresar a la universidad. Del mismo modo se facilita la educación para adultos, bajo el programa de escuelas nocturnas y se eliminan los impedimentos prejuiciosos de los conservadores que eran excluyentes frente a factores como: la condición política de los estudiantes (si eran o no hijos de liberales o simpatizantes del socialismo), sus creencias religiosas (superar la exclusividad de la educación para los hijos de los católicos), la perspectiva moralista frente a los hijos naturales y las cuestiones étnicas (Arias, 2016, p.64).

La educación primaria y secundaria recibieron recursos del Estado a través de la Escuela Normal Superior, que se enfocaba en las nuevas corrientes de pensamiento y formaba a los maestros del bachillerato en especialidades como: ciencias naturales, física y matemáticas; literatura e idiomas, y ciencias

sociales. Arias (2011) señala que la Normal Superior también fue la responsable de contribuir “de manera decisiva a las primeras formas de institucionalización de las ciencias sociales en el país. Esto significa que propició la profesionalización de disciplinas como la historia, la antropología, la geografía, la lingüística, etc.” (p.66). La Universidad Nacional también fue objeto de reestructuración por el aumento de los recursos, mejoró en lo académico y administrativo, creó nuevas carreras y determinó la libertad de cátedra, cosa que era apoyada por Germán Arciniegas (un reconocido intelectual que apoyó este proceso desde el Ministerio de Educación). Todas estas medidas —al parecer— apuntaban no sólo a la superación de las brechas educativas, sino que buscaban un objetivo más grande, y era que las masas populares tuvieran una perspectiva crítica en las decisiones políticas:

www.bdigital.ula.ve

Fieles al ideario liberal, López y sus asesores intelectuales creían, en efecto, que la educación también podía arrojar grandes beneficios políticos; para todos ellos, una buena formación debía ser una herramienta muy valiosa para afianzar la democracia. Preocupados por el auge de la extrema derecha en el mundo, los pedagogos liberales esperaban que una mejor preparación blindara al ciudadano contra el fascismo, el cual, gracias en parte al sufragio electoral, había alcanzado el poder y amenazaba la democracia en varios lugares del planeta, incluida Colombia. (Arias, 2011, p.68)

Si bien la reforma en la educación fue uno de los legados más importantes del periodo de López, no tuvo el mismo apoyo en los otros intentos de modernización planteados en su programa de gobierno; por ejemplo, en cuanto a la reforma tributaria, se encontró que, no sólo le iban hacer oposición los conservadores, sino también parte importante de los liberales que no querían permitir que se impusiera la política intervencionista de la economía, con la que se quería hacer más equitativo el régimen impositivo del país,

exigiendo a los sectores más ricos de la sociedad a participar de nuevos impuestos, pues hasta ahora, “los recursos estatales dependían esencialmente de los impuestos que gravaban las exportaciones y las importaciones, un modelo obsoleto que sometía al Estado a los vaivenes de la coyuntura internacional” (Arias, p.68). Las medidas que se aprobaron bajo la Ley 78 de 1935 modificaban las tarifas para las rentas altas, creaba el impuesto al patrimonio y a las utilidades; todo esto con el fin de fortalecer el ahorro y lograr financiar los gastos de la educación, salud, higiene, etc. Sin embargo, la oposición no se hizo esperar y en este caso unió no sólo a los conservadores, sino también al ala liberal que comulgaba con los empresarios y propietarios para desestimar el nuevo régimen tributario:

La reacción frente a estas medidas liderada por facciones de ambos partidos no se hizo esperar. De hecho, muchas de las medidas tímidamente reformistas de la “revolución en marcha” fueron detenidas, e incluso revertidas. Los grandes propietarios liberales y conservadores, organizados en torno al Sindicato de Propietarios y Empresarios Agrícolas que, más tarde derivó en la Acción Patriótica Económica Nacional (Apen), fueron la cabeza de lanza de una contrarreforma agraria que sería particularmente nefasta para el futuro del país. (Pizarro, 2015, p. 27)

En cuanto a la reforma agraria, López la concibe desde una condición de necesidad por la baja producción en las grandes propiedades, a diferencia de lo que sucedía en países vecinos, donde la tecnología hacía parte importante de las inversiones que ideaban en sus tierras los argentinos, chilenos, etc. En Colombia se estaba muy atrasado en este propósito, por tal motivo, el Presidente consideró necesario imponerse frente a los terratenientes para que explotaran de mejor manera las grandes extensiones de tierra y de este modo

aumentar la producción y oferta laboral. Un meritorio reconocimiento que se dio en la ley de tierras fue atribuirle a la propiedad el mote de bien social; es decir, que una propiedad podía ser nacionalizada si algún plan así lo exigía, por ejemplo, la construcción de una carretera. También se consideró que “la propiedad que no fuese explotada en un lapso de diez años —un plazo que luego se amplió a quince— pasaría a manos del Estado previa indemnización” (Arias, p.71).

Para ver los alcances de la reforma hay que recurrir a González (2006) quien le da un peso fundamental al “hambre de tierra” de los aparceros y campesinos como contribución al escenario de violencia que se estaba fraguando a lo largo del país. Para el autor es importante destacar los movimientos de invasiones latifundistas, que se reiniciaron a partir de 1931, de los grupos autodenominados colonos que invadieron terrenos ociosos y de los demás grupos de ocupación activa que, apenas se impulsó la economía luego de la gran depresión, llevó a muchos hacendados a cercar baldíos; situación que fue objeto de diferentes tipos de confrontaciones entre colonos, arrendatario y propietarios. Para González, el grupo que finalmente se benefició fue el que tuvo la capacidad de hacerle frente a las medidas reformistas del Estado, es decir, los terratenientes que se agruparon para defender sus intereses “en torno a sus entidades gremiales, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y la Federación Nacional de Cafeteros (Fedecafé) (p.266). Un punto sobresaliente de la ley de tierras de 1936 es que esta favorecía a los campesinos colonos que poseían los baldíos y que habían permanecido en



ellos por lo menos los últimos cinco años; todo lo que estuviera lejos de cumplir tales requisitos, no era reconocido y, debido a ello, los más beneficiados fueron los hacendados.

Del mismo modo, la ley no constituyó ningún tipo de límite a la propiedad ni pretendió revisar los derechos de propiedad, por el contrario, los derechos se alienaron para favorecer al propietario individual: “Los antiguos colonos se convirtieron así en ocupantes de hecho, y en las mismas regiones de colonización se conformaron y consolidaron las grandes propiedades de la Colombia contemporánea” (González, Bolívar y Vázquez, 2002, p. 280).

Aunque la ley de tierras y, en general, el programa de gobierno, fueron detenidos por las estrategias de la oposición, del periodo de la República Liberal es posible señalar algunos avances, que no radican precisamente en la disolución de los problemas partidistas en la zona rural del país, pues muchos campesinos consideraron que la función social de la propiedad les daba derecho a las tierras no cultivadas, tuvieran o no título, y pronto se hizo evidente que para los terratenientes este derecho iba en contra de sus intereses, motivo por el cual los campesinos tuvieron que enfrentarse a los peones armados de los terratenientes (Molano, 2015, p. 574).

Situación distinta sobrevino con la reforma laboral que caracterizó al trabajador urbano, con progresos en las condiciones salariales, reconocimiento de derechos de prestaciones sociales, mejores condiciones de trabajo y posicionamiento de la organización obrera y sindical que fue apoyada jurídica, económica y políticamente: “fue así que surgió en 1938, la Confederación de

Trabajadores de Colombia (CTC), primera central obrera del país”. De este modo, la nueva organización obrera se uniría al apoyo que ya le había concedido la izquierda al partido Liberal bajo las filas del Partido Comunista creado en 1930 y la disidencia liberal: Unión Nacional Revolucionaria Izquierdista (Unir) en cabeza de Jorge Eliecer Gaitán (Arias, 2011 p. 72). López le había otorgado el derecho al sufragio a todos los varones, escenario que le daba al Partido Liberal una ventaja en las urnas, pues ahora los ciudadanos podían sentirse respaldados por el Estado (más incluyente y democrático) en las reclamaciones frente a la violación de sus derechos laborales. Pécaut (2016) hace énfasis en que, a pesar de la renuncia del Gobierno a continuar con su reforma transformadora luego de 1937, no fue suficiente para que los sectores populares del Partido Liberal dejaran de creer en la transformación en conjunto de las que fueron beneficiados (p. 633). De hecho, el partido comunista se hizo partícipe de los ideales liberales con los que se pretendía modernizar la política colombiana:

El joven Partido Comunista, [...] después de haber sido obligado a aplicar en su primer momento la línea de “clase contra clase”, al precio de muchas convulsiones internas, no se queda atrás para celebrar la “Revolución en marcha” en la que percibe un “Frente popular” a la colombiana: durante una década predica la “colaboración de clases” y se comporta prácticamente como una simple fracción del Partido Liberal. (Pécaut, 2016, p.634 en Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2016)

Las pretensiones de la *revolución en marcha* y su propósito de intervenir en la injerencia de la Iglesia frente a los asuntos que le pertenecían al Estado, fueron objeto de una prolongada lucha entre el Gobierno frente a los conservadores encabezados por Laureano Gómez y la Iglesia. López consideró

necesario delimitar el poder religioso que hasta ahora había tenido la institución eclesiástica en la educación, la libertad religiosa, el matrimonio y el divorcio; además, propició que se eliminara el nombre de Dios del preámbulo de la Constitución. Estos propósitos de cambio fueron atacados ferozmente por los conservadores y por la Iglesia, e incluso por algunos líderes del liberalismo, pues al darle cabida a temas tan controversiales se atacaba directamente “la base fundamental de la cultura colombiana” (Arias, 2011 p.78). La actitud de la Iglesia y del líder conservador Laureano Gómez frente a esta situación no se hizo esperar, de modo que crearon la Acción Católica y convocaron un Congreso Eucarístico Bolivariano con el fin de enfrentar el desafío: “el congreso atacó con dureza el divorcio, el matrimonio civil y la separación de poderes y declaró que la Iglesia estaba dispuesta a derramar sangre en defensa de sus principios” (Molano, 2016 p. 576 en Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2016). Esta forma de respuesta de la Iglesia fue atendida por muchos campesinos y selló la manera en la que se iba a desatar la violencia en distintas regiones del país cuando los conservadores retomaran el poder.

Además, la lucha en contra de todas las ideas reformistas de López se consideraba necesaria debido a que fueron relacionadas con el socialismo que ya había cogido fuerza en otras partes del mundo. Arias (2011) señala que para la oposición la forma como se podía solucionar lo que estaba pasando en el país, era con el autoritarismo de derecha, cosa que ya en otros países había funcionado cuando se habían querido deshacer los lazos de la tradición y el

orden cristiano con ideas ateas de la izquierda y el socialismo que ahora estaba promoviendo el Partido Liberal:

Para amplios sectores de la oposición, lo que sucedía en Colombia era el fiel reflejo de lo que estaba pasando en otras latitudes del planeta: el Gobierno español había desatado el anticlericalismo más despiadado; la revuelta social sacudía a Europa y a algunos países latinoamericanos; el comunismo conocía un auge sin precedentes en todas partes. De una u otra manera eso mismo estaba sucediendo en Colombia: ¿el gobierno de López no se había acaso aliado con los comunistas creando, como en Francia y en España, un Frente Popular? La persecución religiosa y la exacerbación de las masas, ¿no constituían una inquietante copia de las políticas ateas y socialistas de los regímenes revolucionarios de la Unión Soviética y de México?. (p. 80)

Finalmente, bajo la presión de la oposición, de sus asociaciones y de las fuertes críticas que recibió López, incluso desde su propio partido, en diciembre de 1936, decide hacer una “pausa” en la implementación de las reformas que había planeado. Si bien, logró otro periodo presidencial, ahora su tono fue moderado y conciliador. Lo más sorprendente de la incapacidad de llevar a feliz término la “revolución en marcha” es precisamente la oposición decidida a una sociedad más abierta, con derechos políticos y sociales, por la costumbre de tener a la sociedad bajo los criterios de la estructura jerarquizada que promovía el partido Conservador y la Iglesia, idea por la que se luchará fuertemente en la regeneración conservadora y motivará la violencia por los siguientes veinte años, sobre todo, en la zona rural.

Este período de la política colombiana terminó con la renuncia de Alfonso Pumarejo López en 1945, debido, en gran parte, a la fuerte presión conservadora liderada por Laureano Gómez y a las constantes amenazas de desestabilización contra su gobierno. En su mensaje de renuncia enviado al

Congreso Pumarejo López hizo referencia al “sistemático propósito de fomentar y zozobra en Colombia, que había dado como resultado una deformación del ánimo político en toda la nación” (Henderson, 2006, p. 419). En este discurso el político reconocía que la oposición política había conseguido derrocarlo democráticamente; no obstante, el análisis que puede hacerse sobre esta decisión es que el Partido Liberal no había podido concretar su proyecto y que, inevitablemente, perdía control y poder sobre el Partido Conservador, lo que se constató en las próximas décadas.

La República Liberal acentuó los problemas históricos de los partidos tradicionales en Colombia, fue durante este período cuando se sentaron las condiciones para la violencia fratricida y partidista. Surgió una relación identidad (personal) partido que luego dio pie a uno de los momentos más fatídicos de la historia política y social de Colombia: *la Violencia*; sobre el cual se desarrollará el último capítulo de la investigación. Es a partir de 1930 que la élite política colombiana se embarca en un proceso de autodestrucción que somete al país a una cruenta guerra civil y a la suspensión de las condiciones democráticas de gobierno.

## CAPÍTULO III

### **“LA VIOLENCIA” Y ACUERDO DEL FRENTE NACIONAL (1946-1974)**

La renuncia a la presidencia de Alfonso López Pumarejo en 1945 y el arribo al poder del conservador Mariano Ospina Pérez en 1946 tienen, para la configuración política colombiana, dos lecturas e implicaciones significativas, por un lado, ambos acontecimientos son resultado de la evidente fragmentación e inestabilidad bipartidista histórica del país; por el otro, el segundo de ellos desencadenaría, junto con otros hechos, una de las épocas más violentas de las que, hasta ese momento, se había tenido registro y que conllevó a una confrontación fratricida en casi todo el territorio nacional. Esta época se conoce como *la Violencia* en Colombia y se sitúa entre los años 1946 y 1957 con el fin del período dictatorial militar de Rojas Pinilla y la instauración del Frente Nacional como medida de acuerdo para la repartición del poder entre Liberales y Conservadores desde una perspectiva democrática que culmina en 1974. La finalidad de esta sección de la investigación es analizar los acontecimientos más relevantes de la historia político-partidista colombiana del período comprendido entre 1946 y 1974, para así comprender los hechos violentos que sobrevendrían la realidad política nacional, y que siguen afectando la estabilidad de la nación en la actualidad.

A principios de 1946, luego de la renuncia de Alfonso López Pumarejo, el período de dominio liberal terminaba de manera abrupta, dejando un partido profundamente dividido, lo que produjo tensiones internas que fueron

determinantes para la asunción conservadora al poder ese mismo año en la figura de Mariano Pérez Ospina. La campaña presidencial de 1946 estuvo definida por un fuerte sectarismo partidista que giraba en torno a las dos grandes figuras del Partido Liberal que eran Jorge Eliécer Gaitán y Gabriel Turbay<sup>2</sup>, respecto a esto Henderson (2006) plantea que “las últimas semanas de la campaña presidencial de 1946 fueron difíciles para el liberalismo. Alfonso López Pumarejo afirmó de nuevo su decisión de no apoyar a ninguno de los candidatos, mientras que Turbay y Gaitán redoblaron sus mutuos ataques” (p. 434). Frente a esto, los conservadores eligieron a Mariano Pérez Ospina, un influyente hombre de negocios, descendiente de importantes figuras políticas colombianas, como su representante a las elecciones, en una jugada política astuta, pues “Ospina era más aceptable para los liberales moderados y de derecha que cualquiera de sus propios candidatos. Turbay, era apoyado por el Partido Comunista. Y Gaitán enojó y atemorizó a los liberales moderados con sus discursos sobre las reivindicaciones sociales a costa de ellos” (Henderson, p. 434).

Lo que esto demuestra es que las diferencias ideológicas y programáticas fundamentales de ambos partidos no eran tan radicales y no eran siempre esencialmente antagónicas; las alas moderadas de los partidos se caracterizaban por una tradición cooperativista o de convivencia, es el deslastre de estas ideas y el afianzamiento del radicalismo político, ejercido en la figura de líderes

---

<sup>2</sup> El tema de la raza hizo que la campaña presidencial fuera especialmente desagradable para Gabriel Turbay, hijo de emigrantes sirios. Los enemigos de Turbay afirmaron que no merecía gobernar al país, pues ni “una sola gota de sangre colombiana” corría por sus venas. Esta acusación era, sin embargo, indemostrable. Bautizado en Bucaramanga y criado como católico, la ciudadanía de Turbay era irrecusable... Los conservadores llegaron incluso a usar una retórica en contra de los musulmanes para atacar la candidatura de Turbay. Desatemos “una nueva cruzada contra el Turco”, “una nueva batalla de Lepanto”, fulminaba Guillermo León Valencia”. (Henderson, 2006, pp. 430-431)

polarizantes, lo que va a generar el rompimiento del orden social y político establecido, cuyo resultado fue uno de los períodos de violencia más cruentos de Colombia y del que se tenga registro en América Latina.

En este contexto, y, principalmente, a razón de la fuerte fragmentación liberal, el 5 de mayo de 1946 Ospina Pérez obtuvo la victoria presidencial sobre sus dos rivales liberales, Gaitán y Turbay, e inmediatamente expresó su ratificación a los puntos del programa de Unión Nacional y reiteró su invitación a la conciliación de la nación (Guzmán, Fals y Umaña, 1980, p. 27). A pesar de su discurso mediador y “pese a ciertos gestos favorables a los liberales, como ofrecerles algunos ministerios durante su primer gabinete, las relaciones entre ambos partidos continuaron deteriorándose. A diario, la prensa y la radio liberal y conservadora informaban acerca de nuevos hechos de violencia, responsabilizando sistemáticamente a sus contrincantes” (Arias, 2013, p.88). Ospina, aunque moderado y dispuesto a ceder espacios de poder a los liberales, no pudo lograr que la polarización que se generó por las diferencias ideológicas desde los comienzos de la Revolución en Marcha fuera superada; al contrario, luego de la derrota liberal 1946, estos elementos diferenciales se agudizaron y los enfrentamientos en las regiones alcanzaron dimensiones terroríficas.

### **Jorge Eliécer Gaitán: populismo y violencia**

El 9 de abril de 1948, Jorge Eliécer Gaitán, líder del partido Liberal y personaje alineado a las ideas populistas de otras figuras políticas como Nasser en Egipto o Vargas en Brasil, era asesinado en Bogotá; este episodio, sin lugar a



dudas, no sólo intensificó los hechos de violencia en el país con el llamado *Bogotazo*, sino que catapultó a Gaitán como el símbolo de la lucha armada y política de corte popular por las reivindicaciones sociales en Colombia. Gaitán ha sido uno de los políticos más influyentes en la historia de Colombia, vale la pena entonces adentrarse en su formación y propuestas políticas, pues sobre estas reposan el entendimiento sobre la importancia de su figura en el período de *la Violencia* y en la creación de grupos insurgentes en la década de los sesenta, cuyas aspiraciones guardan una relación inexorable con la lucha por una reforma agraria y reivindicaciones sociales que también avalaba Gaitán.

Sobre Gaitán, Arias (2013) expone que este “hacía parte de una nueva generación de destacados políticos e intelectuales que, desde los años veinte, venían luchando, desde orillas diferentes, por una renovación de los partidos” (p. 95). Durante esta etapa, Gaitán y otros compañeros de generación crearon la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria (UNIR), tal y como lo explica Dessau (s.f.) la creación de este movimiento político fue el resultado del desengaño de jóvenes políticos por las directrices seguidas por el liberalismo, el que luego de 30 años de control conservador, llegaba al poder en 1930, atacando no sólo a comunistas y sindicalistas, también a los cerca de 50.000 miembros de la propuesta Unirista, lo que propició la desaparición del naciente partido. (p. 3)

Durante sus inicios en la vida política, y mucho más en su época Unirista, Gaitán trató de acercarse a los sectores populares, visitó las zonas más pobres de las ciudades, dictó conferencias en barrios obreros y “el lenguaje que utilizaba también era una forma de conectarse con el proletariado y el campesinado: al

hablar del “país real”, olvidado y traicionado por el “país político” de la oligarquía, despertaba la simpatía y el apoyo de campesinos, artesanos, obreros y sectores de la clase media” (Arias, 2013, p. 96). Con esto, Gaitán logró posicionarse como el líder protector de las bases populares del país, su representante, su voz, la que no encontraban en las élites conservadoras o liberales; desde ese entonces, Gaitán “el negro”, como peyorativamente lo nombraban miembros de la clase alta colombiana, en su mayoría blanca, se convertía en el portavoz de los marginados, con un discurso populista<sup>3</sup>, que avivó pasiones y captó una lealtad política e ideológica que años después lo consagró como líder del Partido Liberal.

La infructuosa creación de la UNIR, que se disolvió en 1933, llevó a Gaitán a replantearse su papel en la escena política partidista, con esto, fue absorbido nuevamente por el Partido Liberal. El propósito de Gaitán era desplegar sus ideas revolucionarias desde la maquinaria de un partido político con solidez e historia para desplegar políticas en beneficio de las clases bajas, medias y de las mujeres; lo que le promovió su esfinge de figura carismática y paternalista en la, ya bastante polarizada, sociedad colombiana. Lo que entendió Gaitán, lo que lo hace visionario y una especie de ‘outsider’ dentro de los movimientos de poder ya consolidados, fue que entendió que “los míticos lazos de unión entre el campesinado, por una parte, y los partidos Liberal y Conservador, por otra, se hallaban sólidamente consolidados. La solución no residía en disolver esos lazos,

---

<sup>3</sup> El populismo latinoamericano puso en marcha reformas sociales, muy ambiciosas en algunos casos, que contemplaban mejoras salariales, creación de empleo, prestaciones laborales, entre otras. El vuelco era total: antes de 1930 la mayor parte del gasto público en América Latina estaba destinado a asegurar el orden y el desarrollo de la infraestructura... Los gobiernos populistas fomentaron una verdadera redistribución del ingreso y de la riqueza que benefició a los sectores populares y a las clases medias. La política social buscaba, por una parte, al mejorar la suerte de un mayor número de personas, aumentaba la demanda interna, lo que propiciaba, a su vez el desarrollo de la industria nacional; por otro lado, era un instrumento muy útil para atraer a una clientela electoral que el consumismo también intentaba seducir. (Arias, 2011, p. 97)

sino en reforzarlos, al menos en relación a una de las dos opciones tradicionales (en este caso el Partido Liberal) (Dessau, s.f., p. 3). Fue justamente esto lo que hizo Gaitán, aprovechar la plataforma que le brindaba un movimiento político consolidado a nivel nacional y capitalizar un discurso y una propuesta distinta a las tradicionales dentro de este.

El desarrollo del gaitanismo en el partido Liberal siempre se mantuvo como una de los proyectos más sobresalientes dentro de su conjunto; luego de la derrota y evidente fragmentación del partido en las elecciones presidenciales de 1946, y con el retiro de la vida política de Gabriel Turbay, este se polarizó en torno a dos facciones dominantes, los santistas (en apoyo a Eduardo Santos), el ala moderado y los gaitanistas, el ala radical. A principios de 1947, Gaitán convocó a una convención gaitanista nacional “durante ella hizo aprobar un programa<sup>4</sup> que exigía que cualquier liberal que fuese elegido o aceptara un cargo en el gobierno de Ospina Pérez debía acatar el documento gaitanista” (Henderson, 2006, p. 436). Esto representó un duro golpe ideológico para los liberales no gaitanistas, ya que todos los miembros del partido debían aceptarlas si Gaitán y su eje ganaban las elecciones para el Congreso, a realizarse en marzo.

Estas elecciones van a ser determinantes para el devenir histórico colombiano, pues después de estas, y articuladas a la cruenta historia violenta entre los partidos tradicionales dominantes, se desataría junto con el asesinato de Gaitán uno de los períodos más violentos del país:

---

<sup>4</sup> El programa gaitanista de 1947 reafirmó los objetivos tradicionales de la izquierda liberal, una mayor intervención del Estado en la vida nacional, la extensión de las protecciones económicas y de los beneficios a las clases baja y media, y la preservación de las buenas relaciones con Estados Unidos y con los gobiernos reformistas del hemisferio (Henderson, 2006, p. 436).

El gaitanismo ganó las elecciones legislativas de 1947 y Gaitán el control total sobre su partido. Después de una fugaz colaboración del Partido Liberal con Ospina, Gaitán abandonó la Unidad Nacional. El gobierno de Ospina emprendió la conservatización de las FF.MM. y de la Policía para imponer su propio orden social. Los liberales propusieron que la Policía quedara bajo su jurisdicción del Congreso, donde eran mayoría, para detener la escalada de sangre (Molano, 2016, p. 578 citado en Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2016).

Estos resultados exacerbaban los ánimos políticos en el país, pues con la imposibilidad de Ospina Pérez de conciliar y mantener la unidad nacional y con el rompimiento de esta última con el triunfo de Gaitán como figura radical que ya había roto con esa unidad nacional, las condiciones estaban dadas para un estallido de violencia en el país. Gaitán fue asesinado el 9 de abril de 1948, con esto “se desencadenaron disturbios de proporciones nunca vista en Colombia. Para cuando terminaron, cerca de dos mil quinientas personas yacían muertas en las calles, varios miles estaban heridos y cerca de doscientos negocios privados, edificios gubernamentales, escuelas parroquiales e iglesias habían sido incendiados” (Henderson, p. 451). Las revueltas o el *Bogotazo* como se le conoce a los eventos violentos que sucedieron a la muerte de Gaitán, no provocaron un cambio representativo en *statu quo* político nacional, lo que sí lograron fue acelerar el camino hacia el inminente colapso político que acabaría en una de las guerras civiles más cruentas de la historia de nacional.

Respecto al *Bogotazo*, Arias (2013) comenta que “a corto plazo, la situación se agravó aún más por el estallido de revueltas populares en diferentes lugares del país, en las que se mezclaban sentimientos de tristeza, dolor, frustración, ira, venganza y resentimiento” (p. 103). Sin embargo, “el gaitanismo parecía anunciar, así, su retorno al oficialismo liberal... Detrás de actos de violencia, no hubo una

orientación política que les diera sentido. Todo se redujo a la anarquía y lo que hubiera podido ser una revolución se quedó en explosión invertebrada de furia que sacó a flote todo el odio y desengaño acumulados del pueblo” (p. 104). En el largo plazo, este episodio de la historia colombiana no sólo debilitó el eje progresista/populista del Partido Liberal, también demostró el carácter violento y destructivo de los sectores populares, mismo que influiría de manera directa en el levantamiento armado que empieza en la década de los sesenta con el surgimiento de las guerrillas.

El ‘país político’ al que hacía referencia el mismo Gaitán fue un lugar tenue en los meses que siguieron a su asesinato. Este “fue el hecho cumbre de una estrategia para obstruirle la Presidencia de la República. Dentro de otra – paralela – encaminada a inhibir a los liberales de las urnas” (Molano, 2016, p. 578 en Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2016). Con esto, el gobierno conservador cercaba a la Colombia política, promoviendo el uso de la fuerza y, por tanto, las acciones armadas como medio de sometimiento a su adversario. Con este panorama, tanto conservadores como liberales, socavaban el casi inexistente carácter pacífico de la vida política y social en el país, los ataques continuaron, la violencia popular fue reprimida por la violencia oficial, la nación se encaminaba de forma inevitable a un rompimiento violento del orden establecido.

La figura política de Gaitán se puede determinar como una de contrastes y contradicciones, al tiempo que de mucho peso para el estudio de los asuntos políticos colombianos de la contemporaneidad. Por un lado, fue un líder con un entendimiento único sobre el escenario político colombiano, su configuración y

como esta podía ser aprovechada en beneficio de su propia propuesta política. Por otro, esa proyecto que pretendía favorecer a las bases populares, nunca se deslastró del liberalismo económico como base fundamental de su despliegue; lo que evidencia el carácter clientelista de su plan político. Finalmente, Gaitán probó ser un personaje con el lenguaje político propio de un líder polarizante y paternalista; quien pudo liderar su partido y logró tambalear la propuesta conservadora, no obstante, fue justamente su radicalismo el que agitó a sus seguidores y los condujo hacia a la antipolítica de la violencia como respuesta.

### ***La Violencia: guerra civil y dictadura militar (1946-1965)***

En 1946, con el fin de la República Liberal, la historia partidista y social colombiana sufriría uno de los cambios más radicales en su devenir; varios hechos como el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, la radicalización del gobierno conservador de Ospina Pérez, la marcada polarización ideológico-partidista en el interior del país y la incapacidad de los actores de poder para negociar una solución política, fueron las atenuantes más relevantes del desencadenamiento de la etapa conocida como *la Violencia*, la cual terminaría, al menos en lo que respecta a la lucha armada partidista, en 1964 con el acuerdo del Frente Nacional.

Varios autores dedicados al estudio de la historia política contemporánea de Colombia, entre ellos Ricardo Arias y James Henderson, coinciden en señalar que es una tarea ardua precisar la fecha exacta de inicio de *La Violencia*; este punto ha sido objeto de discusión de varios analistas, pues algunos sitúan esta etapa como una que empezó incluso en tiempo de la colonia y la reconocen como un

resultado natural de la configuración política del país. Respecto a esto Arias (2013) comenta que la relativa armonía entre los partidos que conoció el país durante las tres primeras décadas del siglo XX, se fue deteriorando a partir de 1930 (pp. 89, 90), esta década, como se ha comentado en capítulos anteriores es esencial para el entendimiento del conflicto partidista o lo que puede denominarse como la relación entre identidades partidistas y la violencia en el país.

En aras de entender las implicaciones culturales en todos los niveles de la vida colombiana de *la Violencia*, es significativo considerar un breve análisis hecho por Arias (2011), según el autor:

A la Violencia no se le dio el nombre de “guerra civil” ni de “revolución” como algunos contemporáneos lo llamaban. La denominación *la Violencia* se impuso y pasó a ser de uso común en la cotidianidad... La violencia es una denominación vaga, abstracta. Frases repetidas por miles de campesinos, como “la Violencia’ me mató la familia”, “la Violencia’ me quitó la tierra”, “la Violencia’ me hizo huir del campo”, no aludían a nadie en concreto, no se referían a personas que pudiesen ser identificadas; remitían, más bien, a una especie de “fatalidad histórica”, similar a un terremoto o a cualquier otra calamidad provocada por la naturaleza. Por la naturaleza, no por los hombres, no por el entorno social. Es decir, se trataba de un fenómeno surgido de repente, imprevisible, sin relación alguna con la acción de los hombres, ajeno por completo al contexto de la época. Si todo se debía, en última instancia, a “la Violencia”, los verdaderos protagonistas de la confrontación se esfumaban, quedaban hábilmente ocultos, al igual que sus intereses, que sus motivaciones. Lograr que la sociedad civil hablara no de la “guerra civil”, sino de “la Violencia” obedecía, por consiguiente, a los intereses ideológicos de aquellos que, una vez finalizado el conflicto, querían, por una parte, borrar toda huella de su responsabilidad y, en segunda medida, presentar este triste paréntesis como una disrupción pasajera de una historia no violenta. (p. 89)

Con esto, se puede comprender que *la Violencia* fue una etapa marcada no sólo por la furia social, también fue un momento en que se construyó una idea

sobre esta que pretendía minimizar las responsabilidades y justificar las acciones de un partido u otro; lo que muestra la fuerte dimensión cultural y la importancia del asunto identitario en relación a los partidos políticos tradicionales. En todo caso en el que la política es superada por las armas es elemental analizar el factor cultural “porque en cada cultura rige la orden de no matar, y como dicha orden está mediada culturalmente, traspasar este principio básico de la convivencia humana también es un acto cultural que debe ser incluido en la investigación de la violencia” (Rehm, 2014, p. 22), así, el estudio de esta confrontación civil colombiana debe ser explicado, en primera instancia, desde el nivel cultural, pues sólo de esta forma se puede comprender tal nivel de agresividad entre conciudadanos. De esta forma, “en el caso colombiano, la militancia en los partidos tradicionales, que son *subculturas políticas*, representaba el contexto de la Violencia: liberales y conservadores se mataban por ser liberales y conservadores” (Rehm, p. 22).

Ahora bien, otro aspecto importante que es necesario determinar en este punto es la periodización de *la Violencia*; sobre esto Gómez (2014) propone tres fases, la primera de 1949 a 1953, la segunda de 1954 a 1957 y la violencia tardía entre 1957 y 1965. Antes del estudio particular de cada una de estas etapas, es relevante analizar la respuesta gubernamental tras el asesinato de Gaitán, esta no era sólo el resultado de una postura partidista, también contribuyó en gran medida a la radicalización en el interior del país. “El gobierno de Ospina enfrentó la violencia popular recurriendo a la violencia oficial. A Bogotá llegaron policías de regiones boyacenses, en las que hacía ya varios años se cultivaba un profundo



resentimiento antiliberal” (Arias, p. 105). También se usaron fuerzas paraestatales para el restablecimiento del orden, en este caso los *chulavitas* se desplegaron por la ciudad y ejercieron acciones violentas orientadas al cuidado de los sectores empresariales, que fueron los mayores destinatarios de la ira popular. Es decir, se perpetró el montaje de una estructura estatal que usaba las fuerzas estatales y paraestatales que se habían creado décadas atrás para aniquilar a las fuerzas políticas opositoras.

Respecto a la primera ola de *la Violencia* (1946-1953), aunque los expertos marcan su inicio en 1946, fue entre 1948 y 1949 cuando el país se dirigió de manera estrepitosa a la guerra civil, con breves lapsos en los que parecía que ambos partidos podían llegar a consensos, los dirigentes de ambos bloques mantuvieron posiciones inflexibles y mutua enemistad cuya consecuencia fue el rompimiento del régimen democrático instaurado hasta ese momento. Los liberales dominaron las elecciones para el Congreso de 1949, con esto “se prepararon para usar su poder legislativo con el fin de controlar a Ospina Pérez, a quien continuaban considerando un presidente débil y accidental” (Henderson, 2006, p. 462). Sin embargo, no tomaron en cuenta los poderes conferidos al presidente, entre otros el de suspender el Congreso cuando este considerara que la institución estaba perturbando el orden público, es así que en noviembre de 1949 Ospina Pérez impuso el estado de sitio, después de esta fecha, la dirigencia liberal creyó que no tenía más recursos que armar a las guerrillas en los llanos orientales y en otros lugares del país (Henderson, p. 463).

La ya precaria situación política e institucional se agudizó con el triunfo en las elecciones presidenciales del radical conservador Laureano Gómez en 1950, este:

Quería erigir un régimen clerical-conservador, similar al sistema franquista de regía España desde finales de los años treinta. Su proyecto estaba en las antípodas no sólo de la propuesta de López, sino de cualquier modelo democrático. Para Laureano, el Estado ideal debía reposar en tres pilares fundamentales: el catolicismo, el centralismo y el corporativismo. (Arias, 2011, p. 107)

Además, Gómez se haría de las fuerzas policiales para reforzar la autoridad del Estado centro con un proceso de semiprivatización de estas fuerzas en beneficio de los famosos *chulavitas*, esto no sólo generó un resurgimiento de la violencia en los grupos armados liberales, también fue el período presidencial con los números más elevados de muertes fratricidas, al tiempo que generó un levantamiento y posterior régimen de gobierno militar. Sobre Gómez, Henderson comenta que “sus guerras fratricidas produjeron cincuenta mil muertos, un cuarto de todos los asesinatos ocurridos durante *la Violencia*. En gran parte del territorio nacional, una fuerza de policía conservatizada adelantó un régimen de terror contra liberales” (p. 470).

Durante esta primera ola de la Violencia, las masacres son cada vez más recurrentes:

Sucedan masacres como la de Belalcázar (Cauca) en donde 112 personas son fusiladas en un solo día. Los prisioneros son sacrificados sin misericordia por personal de tropa. Se implanta un férreo sistema de represión en las ciudades y en los campos que produce un estado obsesivo de persecución en quienes no comparten las ideas políticas del gobierno. (Guzmán, Fals y Umaña, 1980, p. 45)

Lo que esto evidencia es que los conservadores instauraron un sistema de gobierno que se amparaba en la violencia como forma de represión política, usando a las fuerzas armadas del estado y las paramilitares para sofocar y acorralar a su opositor; de igual forma, los liberales no aceptaron la persecución y “dirigentes del partido como Carlos Lleras viajaron a Estados Unidos para buscar apoyo para las guerrillas; otros líderes buscaron armamento más cerca en los vecinos países de Venezuela y Panamá” (Henderson, 2006, p. 470). El Partido Liberal se mantuvo enfocado en construir y potenciar unas fuerzas de combate con capacidad de resistir a la policía y paramilitares; se trataba del despliegue de una estructura partidista de guerra con actores formales y no formales involucrados, cuyos resultados van a ser nefastos desde el punto de vista humano, político y social para Colombia y América Latina, no hay en la región una experiencia similar, ni en número de víctimas, ni en tiempo, ni en espacio geográfico, ni en desestabilización político-institucional.

Guzmán, Fals y Umaña (1980) desarrollaron un estudio pormenorizado de todas las fases de *la Violencia*, respecto al primer período detallan los acontecimientos que se dan en las regiones donde hubo mayor número de muertos y un efecto negativo en el largo plazo. Para los autores, las zonas a destacar son el Tolima, la Región Norte (Anzoátegui, Santa Isabel, El Líbano, El Fresno y Falan), la Región Central (Ibagué y Rovira), la Región Oriental, la Región Sur (eje Chaparral-Río Blanco, eje Natagaima-Alpujarra-Dolores y eje Coyaima-Ataco), los Llanos (Arauca, Casanare, Meta y Caquetá), Boyacá, Cundinamarca y Antioquia. Además, los autores puntualizan que es difícil e innecesario detallar lo

ocurrido en otras regiones del país y que “en líneas generales siguió la pauta de lo ya descrito. En todas partes hubo crueldad, sevicia, pérdida de bienes, hurtos y expoliaciones, desplazamientos y migraciones” (p. 95). Los campesinos liberales que no fueron asesinados se dirigieron a las grandes ciudades donde la violencia no hizo mayor erupción; esos campesinos tuvieron que deslastrarse de sus posesiones para empezar de cero una nueva vida en contextos que les eran desfavorables, en la mayoría de los casos.

La segunda fase de la Violencia (1954-1957) empieza a gestarse con el golpe militar del 13 de junio de 1953. Para ese entonces, “la pérdida de control sobre la situación explica la sensación de alivio casi unánime con que se acoge el golpe de Estado del general Rojas Pinilla, un personaje próximo a los conservadores. En los meses que siguen casi todas las guerrillas liberales se desmovilizan, incluso algunas guerrillas comunistas” (Pécaut, 2016, p. 640 citado en Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2016). Esta etapa de aparente apaciguamiento va a durar muy poco, pues las diferencias ideológicas, culturales y las huellas psíquicas de los episodios violentos no desaparecieron nunca entre partidos; aunado a esto los polos radicales de ambos grupos seguían teniendo una influencia intacta tanto en el eje *laureanista* del partido Conservador, como en la base comunista del partido Liberal. Asimismo, es bien sabido que Pinilla llega al poder apoyado por las elites políticas de ambos partidos, a las que debía una suerte de lealtad que, por su carácter militar y también por el interés de desplegar una gestión más autónoma, no pudo mantener por mucho tiempo.

El gobierno de Rojas, transicional y de garantía a la reposición del orden e institucionalidad en el país, debía terminar en 1954, fecha en la que ambos partidos se harían cargo de las riendas políticas nuevamente. Sin embargo, en un giro político, el militar fue reelegido por la Asamblea Nacional Constituyente que había reemplazado al Congreso en 1949; el argumento de Rojas fue evitar la vuelta al sectarismo y a la violencia que habían provocado conservadores y liberales. En un período comprendido entre 1953 y 1954 hubo una especie de pacificación que se gestó desde las fuerzas militares, en texto dirigido a jefes de la armada, fuerza aérea y ejército del 19 de junio de 1953 se les demandaba lo siguiente:

Interpretando el sentir del excelentísimo señor Presidente de la República, Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, lo autorizo para que a todos los individuos que en una u otra forma se hayan comprometido en hechos subversivos contra el orden público y que se presenten voluntariamente ante las autoridades militares haciendo entrega de sus armas, los dejen en completa libertad, les protejan sus vidas, les ayuden a reiniciar sus actividades de trabajo y los auxilien en sus necesidades más apremiantes cuando las circunstancias así lo exijan y usted lo estime necesario. Sírvase hacer conocer esta orden en todas sus dependencias y difundirla en las zonas afectadas de su jurisdicción. (Guzmán, Fals y Umaña, 1980, p. 99)

De igual forma, se concedió un indulto parcial a presos políticos, reincidentes, reos de delitos comunes, prófugos y a quienes hubiesen cometido delitos en su permanencia en las cárceles. Con esto, el régimen de Rojas Pinilla pretendía neutralizar el sectarismo y mostrar la voluntad política de reconstrucción del país mediante unas medidas que apuntaban a una especie de amnistía. A pesar de ello, “en 1954, se reinició la ofensiva militar contra las guerrillas comunistas bajo el pretexto de que desafiaban la legitimidad del Estado, cuando

en realidad lo que amenazaban eran los intereses de los terratenientes” (Arias, 2011, p. 113). Con esto, el militar mostraba un sesgo ideológico y económico que sólo sirvió para reavivar las rencillas, bastó sólo un hecho mínimo para que la violencia se reanudara, “elementos de tropa masacraron a varios campesinos el 12 de noviembre de 1954. Por decreto de 4 de abril de 1955 se declaró “Zona de Operaciones Militares” a Villarrica, Carmen de Apicalá, Icononzo, Cunday, Pandi, Cabrera y todo el Sumapaz” (Guzmán, Fals y Umaña, p. 102).

Este hecho resaltó que el carácter de la violencia colombiana no podía transformarse en un verdadero contexto de paz sin el sesgo partidista o sin la concertación de ambas partes; Rojas no pudo concretar ninguna de estas y Colombia retomó el camino violento. Desde 1954 y hasta que terminó su mandato en 1957 Rojas emprendió una campaña militar férrea en todo el país, los objetivos del gobierno eran actores que aparentemente representaban a ambos partidos, sin embargo, la mayor agresión la soportaron las guerrillas liberales, “el oriente del Tolima fue escenario de enormes batallas entre el ejército y las guerrillas, siendo las guerrillas las claras perdedoras por la desigual guerra en número de hombres, armas e infraestructura que se libraba en el campo de batalla” (Gómez, 2014, p. 21).

Una de las regiones más golpeadas por la violencia militar de Rojas Pinilla fue el Valle del Cauca, específicamente el municipio de Villarrica. Arias (2011) lo ha descrito como “el plan de agresión sobre el campesinado de Villarrica”, en 1955 se realizaron de manera sistemática acciones de bombardeo y ametrallamiento indiscriminado en la región; además, en otras localidades como Alto Sumapaz,

Prado y Dolores (Tolima) se implementaron tácticas militares similares. El resultado, centenares de campesinos muertos y “obligados a emigrar a los montes, es decir a las cabeceras montañosas y selváticas de esos municipios” (Guzmán, Fals y Umaña, p. 107). Durante esta ola de *la Violencia* en todas las zonas de enfrentamientos, quedaron huérfanos, familias desintegradas y hombres con sed venganza y rencor desproporcionado contra el ejército y todo aquello vinculado a las fuerzas oficiales.

Lo que evita una catástrofe de implicaciones mayores es el cambio de gobierno que se hace efectivo el 10 de mayo de 1957, “el frente civil liderado por Lleras y Gómez, y ampliamente apoyado por los gremios, por los jefes del catolicismo, por la gran prensa, por estudiantes, obligó a dimitir a Rojas Pinilla” (Arias, 2011, p. 114). Para lograr el retorno de liberales y conservadores al poder se instauró una Junta Militar integrada por cinco generales; con ello finalizaba la segunda ola de *la Violencia* y se, pretendía, dar inicio a un sistema de gobierno civil, controlado por los dos partidos tradicionales en alternancia. Se esperaba que de esta manera se sentaran las bases de la reconstrucción de la paz y la estabilidad del país, no obstante, debido a las estructuras internas y a influencias externas, el fin de *la Violencia* no pudo ser concretado.

No muchos estudiosos de la Violencia apuntan a una tercera ola de este período, pues a partir de 1957 se establece en el país el acuerdo bipartidista conocido como Frente Nacional, que se suponía debía generar las condiciones políticas e institucionales para el fin de los enfrentamientos. Esto no pudo concretarse a pesar de la concertación, por lo que es importante caracterizar una

última fase de este proceso, la llamada “Violencia tardía” ocurrida entre 1957 y 1966. En 1958 toma el poder Alberto Lleras, con ello se da inicio a la alianza política del Frente Nacional, para ambos partidos la paz y estabilidad de Colombia dependía del pacto hecho que estipulaba que:

Ya no se hablaría más de las antiguas disputas, no se buscaría culpables, no se señalaría agresores y el perdón y olvido deberían reinar. Los medios masivos de difusión, como los principales periódicos apoyaban radicalmente la idea, y se sumaron activamente al apoyo de no hurgar en la historia en la búsqueda de culpables. (Gómez, 2014, p. 24)

A pesar de esto, durante los años siguientes destacan tres acontecimientos que imposibilitarán el fin de los enfrentamientos, la publicación de Monseñor Guzmán Campos titulada “El Libro de la Violencia en Colombia (1962-1964), el surgimiento de guerrillas no partidistas influenciadas por eventos externos y el surgimiento de bandidos, excombatientes de ambos grupos partidistas.

Respecto al primer factor, la publicación de Guzmán rompía el pacto de silencio de los partidos y conllevaba a una reflexión sobre los culpables de la violencia, el religioso popularizó la frase: “todos fuimos culpables de la violencia”. El texto generó una gran discusión sobre el entendimiento de la Violencia, este:

Permitió crear y legitimar en el imaginario nacional una especie de canon interpretativo de un periodo tristemente célebre en la memoria nacional. Tuvo clara influencia durante varias décadas en la ciencia social criolla, al punto que fue el detonante de las visiones más o menos emblemáticas sobre lo ocurrido (Jaramillo, 2012, p. 36).

En su momento fue considerada una publicación valiente y franca que cortaba no sólo con un pacto político, también quedó como un registro histórico



que recordaba una época, cuyas repercusiones sociales y psicológicas serían imposible deslastrar del imaginario colectivo de la nación colombiana.

Otro aspecto importante que caracteriza esta última fase de *la Violencia* es el surgimiento de grupos, guerrilleros, sobre todo, que se oponían al Frente Nacional por considerarlo un sistema cerrado de élites que no personalizaba un cambio real en el país. Para Pécaut (2015) el problema con la alianza política radicaba en la formula política que suscitaba la protesta en diferentes sectores, particularmente a razón de que “se proclame el “estado de sitio” en las coyunturas más diversas, bien sea para gobernar por decreto – hasta 1967 las leyes suponen la mayoría de los 2/3 cuya obtención es un desafío – para hacer frente a las huelgas y otras protestas sociales” (p. 644). Esto, aunado a la intensidad de los movimientos sociales, huelgas largas, represión y la influencia de la revolución soviética, la cubana y la maoísta dará paso a una estructura distinta de enfrentamientos, que, aunque sea heredera de *la Violencia*, también surge con objetivos, intereses y características particulares. “A mitad de los años 1960 se forman en contrapartida organizaciones de guerrilla que en las décadas siguientes confieren a la lucha armada un rol central: las Farc, el Eln y el Epl” (Pécaut, 2016, p. 649 citado en Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2016). Sobre el surgimiento de las guerrillas, aunque es una consecuencia directa del enfrentamiento y descontento respecto a las acciones bipartidistas históricas, este debe ser analizado de manera independiente para que el tema sea comprendido de manera clara.

Finalmente, hay que mencionar a los actores que luego del fin de los dos primeros períodos de *la Violencia* se independizaron de los partidos y se

radicalizaron convirtiéndose en bandidos; “muchos de los afectados por los dos primeros periodos de la Violencia, ex cuadrilleros, ex pájaros, desplazados y demás siguieron reproduciendo acciones violentas, pero esta vez desligados del ideal del partido, y más bien violentando u organizados en nombre de intereses particulares” (Gómez, 2014, p. 25). Así, en los últimos años de la Violencia se originó el “bandidismo” o “bandolerismo”, el cual constaba de grupos organizados que luchaban por sus intereses de forma criminal; es esencial acotar que no fue hasta el momento de la Violencia tardía que se le dio forma a la consistencia del *bandido* en el contexto de confrontación en Colombia.

La Violencia fue un período de intensa fragmentación nacional en términos políticos, sociales y culturales; además del elevado número de pérdidas humanas, de movilizaciones forzosas y de merma económicas para el sector campesino. Medir las verdaderas consecuencias de este período resulta una tarea complicada, ya que oficialmente hay pocas cifras; de acuerdo a los números recolectados por Carrillo (2016), entre 1946 y 1966 se desplazaron en Colombia aproximadamente dos millones de personas, los mayores flujos de personas se concentraban en las ciudades capitales de Departamentos; lo que provocaba hacinamiento y pobreza, así como el menoscabo irreparable de la identidad.

Por último, el estudio apunta a que *La Violencia* tiene dos efectos propios, negativos, que pueden considerarse complementarios; por un lado, acentúa las identificaciones culturales-partidistas nacionales, a la vez que cohesiona de manera voluntaria o forzada la membresía a redes de apoyo colectivas; por el otro, ocasiona una bifurcación de la población que impide que esta se transforme en un

verdadero actor de cambio nacional. Es decir, *la Violencia* además de enfrentamientos fratricidas, desplazamientos forzados y pérdidas económicas, refuerza a las élites políticas y económicas de los partidos tradicionales y limita el surgimiento de una verdadera concepción de ciudadanía y democracia en Colombia.

### **El acuerdo del Frente Nacional (1958- 1974)**

En 1958, después de décadas de violencia bipartidista y de un régimen militar que dejó a Colombia en uno de sus peores contextos económicos, institucionales, políticos y sociales, los partidos Liberal y Conservador, secundados por una junta militar que se hizo del poder de manera transitoria, concertaron un acuerdo político que les permitiría alternarse el poder, a este acuerdo se le denominó el Frente Nacional (en adelante FN); con él, se generaron muchos de los cambios políticos destacados para la nación durante el siglo XX, pues con este no sólo se pretendió estabilizar social, cultural y políticamente al país, también se generaron estructuras armadas beligerantes, que por influencias internas y externas marcarían el rumbo del país desde ese momento hasta la actualidad. Por ello, la contribución final de este trabajo de investigación será hacer una breve revisión del período de del llamado FN y las repercusiones de lo que acaeció durante esta fase para la vida política e institucional colombiana.

El FN empieza a gestarse en 1956 con el Acuerdo de Sitges<sup>5</sup> firmado en España por Laureano Gómez y Alberto Lleras, sin embargo, este se materializa en diciembre de 1957 cuando en un plebiscito se votó a favor y en contra del Acuerdo. El contexto y significado de la consulta puede considerarse histórica para el país:

Los colombianos sancionaron por una mayoría abrumadora el Frente Nacional en el plebiscito. Más de cuatro millones de votos fueron consignados a su favor y sólo doscientos mil en su contra. Esto representó la mayor votación obtenida hasta entonces en la historia nacional y se explicó, en parte, por el hecho de que las mujeres pudieron votar por primera vez (Henderson, 2006, p. 563).

De acuerdo con lo expuesto por Leal (2012), la consolidación del FN comenzó con la puesta en marcha de un nuevo régimen que le dio un vuelco a la lógica de la organización política predominante desde mediados del siglo XIX y terminó en 1974 dejando las bases de un nuevo sistema como legado (p. 164 en Caballero, Pachón y Posada, 2012). Lo que hay que reconocer al FN es el fin de la violencia clientelar y partidista de la que fue víctima la población y la política colombiana, no obstante, “no logró convocar en realidad a la nación en su conjunto. Muy rápido, una oposición cada vez más numerosa y radical sintió que el acuerdo había dejado de lado los intereses de otros sectores. El clima de efervescencia que se vivía en otros lugares del planeta avivó la agitación en el país” (Arias, 2011, p. 117).

---

<sup>5</sup> Motivado por un fuerte resentimiento contra los Ospinistas y contra los jerarcas eclesiásticos que habían apoyado el golpe del 53, Gómez firmó junto con Lleras Camargo la Declaración de Benidorm<sup>1</sup> donde se habló de “volver al orden republicano”, por medio de una acción conjunta para restablecer la libertad y las garantías constitucionales a través de uno o más gobiernos de transición. De ahí en adelante Laureano Gómez fue un gran defensor de la convivencia de los partidos tradicionales. (Mesa, 2009, p. 170)

Uno de los asuntos que más impactó de manera negativa el éxito del FN fue el agitado y cambiante panorama internacional; Fidel Castro salió victorioso en su golpe armado contra Batista en Cuba, Estados Unidos perdía la Guerra de Vietnam y el Mayo Francés de 1968 sentaba las bases para un cambio en las demandas sociales en el mundo. Estos tres acontecimientos marcaron el rumbo de muchas naciones, que exaltadas por las propuestas de los proyectos políticos y sociales de la época, empezaron sus luchas particulares, unas políticas, otras armadas, Colombia no escapó al fervor de esas ideas. En cuanto a las condiciones internas tanto Arias como Molano insisten en dos causas principales, la primera de ellas:

El FN lejos de favorecer la democracia, no fue más que un pacto “oligárquico”, que legitimó el monopolio del poder en manos de las élites y cerró las puertas a todos aquellos que no se identificaban con los partidos tradicionales. Sus adversarios señalaron que, al repartir el poder entre liberales y conservadores, el Frente Nacional le quitó todo sentido al juego democrático: ¿qué interés, se preguntaban, podían tener unas elecciones en las que se sabía de antemano que el triunfador sería el candidato del Frente Nacional?; ¿cuál era el sentido de hacer oposición política si el bipartidismo, amparado en la constitución, podía acaparar todos los puestos gubernamentales? Además de su carácter excluyente y elitista, el Frente Nacional también fue tachado de ser un régimen autoritario, en el que el Ejército adquirió un gran poder y el estado de sitio se convirtió en la práctica cotidiana para debilitar a la oposición. (Arias, 2011, p. 119)

La segunda está relacionada al asunto agrario, sobre esto Molano (2016) explica:

Nuestros dirigentes políticos sabían que el problema de la tierra estaba íntimamente ligado a la lucha armada y que encontraba piso y fuerza donde había organizaciones campesinas con en Sumapaz, Tolima, Santander y Cauca. Donde no las hubo, la persecución política se bandolerizó cuando los partidos les quietaron el apoyo a sus clientelas armadas. Siendo el FN un acuerdo para acabar con “esa guerra civil del siglo XX”, como la llamaba López Pumarejo, los partidos debían encarar el problema agrario continuando una tradición que empezó en los 20. Con el aval y la participación

de los partidos se creó la Comisión para el Estudio de las Causas de la Violencia en 1957. Sin embargo, el rumbo que tomó la revolución en Cuba, obligó a EE.UU. a crear la Alianza para el Progreso<sup>6</sup> como antídoto contra el contagio comunista, dio un nuevo aire a la reforma agraria. (p. 597 en Comisión Histórica para el Conflicto y sus Víctimas, 2016)

Se puede razonar que con el establecimiento del FN los viejos problemas políticos no habían desaparecido, aún se observaban a los mismos actores políticos, las mismas prácticas y las mismas estructuras de poder; Colombia aún no podía capitalizar una democracia real, con pluralidad de partidos y de ideas políticas, con una verdadera alternancia en el poder y con una concepción de ciudadanía sólida; la única fuente de identidad de la población seguía siendo su adhesión partidista. Lo que cambió durante este período fue el surgimiento de actores de oposición, radicales también, que articularon la lucha armada a una ideología política anclada en la efervescencia de lo que ocurría en el mundo y, al mismo tiempo, de las demandas históricas de la tierra en el país.

Ya se ha dicho que el FN se instauró como una propuesta de régimen político que lograra concertar a los dos partidos tradicionales colombianos para, principalmente, superar la violencia entre conciudadanos. Desde 1958 a 1974<sup>7</sup> cuatro gobiernos tuvieron el poder en el país, amparados en el acuerdo

---

<sup>6</sup> Estados Unidos apoyó la reforma agraria en Colombia. Los americanos suministraron una ayuda sustancial bajo el programa Alianza para el Progreso. Kennedy se encontraba en Bogotá en la semana que se firmó la Ley 135. Posteriormente, Estados Unidos y las agencias internacionales de crédito le prestaron a Colombia más de un billón de dólares – el 11% de la financiación total de la Alianza -, del cual gran parte fue asignado a proyectos del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora). Después de aprobada, la reforma no satisfizo las expectativas que suscitó. Sin embargo, sus logros no fueron deleznable. El Incora no sólo concedió eventualmente tierra, en su mayor parte proveniente del dominio público, a cerca de doscientas cincuenta mil familias, sino que también contribuyó a consolidar la posición de los pequeños propietarios del sector agrario colombiano. (Henderson, 2006, p. 574)

<sup>7</sup> 1958-1962 Alberto Lleras Camargo (Liberal), 1962-1966 Guillermo León Valencia (Conservador), 1966-1970 Carlos Lleras Restrepo (Liberal), 1970-1974 Misael Pastrana Borrero (Conservador).

bipartidista; caracterizar con detalle cada uno de ellos no es significativo para los fines de esta investigación, lo que sí es significativo es hacer un balance sobre los logros, los desafíos de este período que marcaron el futuro del país, su estabilidad, democracia e institucionalidad.

Una de las decisiones más importantes que se toman al inicio del gobierno de Alberto Lleras es la creación de la Comisión Especial de Rehabilitación, que fue creada como una especie de gabinete de ministros para tratar todos los asuntos relacionados a la violencia. Para Lleras el problema de la violencia partidista radicaba en los problemas sociales de la nación, en consonancia con esto, la Comisión se encargó de la “construcción de escuelas, asistencia a desplazados, carreteras de penetración, distribución de baldíos, terminación de cárceles, negoció haciendas para hacer parcelaciones campesinas y creó el Programa de colonización dirigida a Ariari, Carare, Sumapaz y Caquetá” (Molano, 2016, p. 598 en Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2016). Con esto, se estableció una estructura que pretendía reparar a las víctimas y dar contraloría al proceso de reparación y reconstrucción del país. Desafortunadamente, la Comisión no tuvo mayor éxito y se acabó debido a la presión política de ciertos líderes de los partidos que tenían mayor interés en los presupuestos departamentales que en la rehabilitación.

Por otro lado, otro fracaso del FN fue la imposibilidad de desplegar una reforma agraria que solucionara los problemas que hasta ese momento habían provocado tantos conflictos a nivel nacional. Según Molano (2016):

El balance de la reforma agraria fue muy pobre. La concentración de tierras se intensificó; las medianas propiedades no se fortalecieron; los apareceros y arrendatarios disminuyeron; avanzó la colonización del piedemonte amazónico, Magdalena medio, Urabá, Catatumbo y costa pacífica. Las cifras son claras: entre 1962 y 1985 entraron por extinción de dominio 3,6 millones de hectáreas. Por compra y cesión o expropiación fueron 889.000 – sólo el 7,4% por expropiación -. La mayoría eran tierras inexploradas. En dos palabras, la principal acción del Incora fue la colonización. “Con el pasar de los días, la mayoría de las zonas de colonización experimentaron un ‘traumático’ proceso de descomposición ante el avance de la ganadería y de la agricultura comercial. La debilidad de la reforma agraria corrió pareja con el fortalecimiento de las organizaciones campesinas y los movimientos armados. (p. 600 en Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2016)

El FN no pudo solventar los dos grandes problemas que el país enfrentaba de manera histórica, las luchas bipartidistas que limitaban la reparación de las víctimas de la violencia y la reconstrucción político-cultural nacional y las reivindicaciones sociales mediante la aprobación de una reforma agraria que devolviera a los campesinos sus tierras; el país siguió siendo tan clientelista como siempre, los actores que se beneficiaban seguían siendo los mismos: los partidos tradicionales y el sector privado.

Otro asunto significativo para el estudio del FN es el tipo de sistema político establecido. Varios autores lo definen como un sistema cerrado, autoritario y antidemocrático debido a varias características que se hicieron visibles, en menos o mayor medida, durante los cuatro gobiernos de la alianza; entre ellas se pueden mencionar: 1) la proclamación del estado de sitio para replegar focos de protesta o violencia; 2) la represión violenta por la fuerza pública; 3) la imposibilidad de participación de terceros partidos en comicios electorales; y 4) el desmoronamiento del Estado de derecho debido al monopolio de la ley por parte



de los partidos. Todo esto generó condiciones para que las disidencias políticas y armadas se radicalizaran y la violencia, que en un momento fue esencialmente partidista, pasara a la hegemonía de grupos guerrilleros insurgentes que, entre otras cosas, demandaban una reforma agraria que favoreciera a los campesinos y no a los terratenientes. Se debe puntualizar que la herencia más nefasta del bipartidismo en Colombia, hasta el período del FN e incluso después fue haber establecido unas condiciones políticas e institucionales lejanas a la esencia de la democracia y de las reivindicaciones sociales. En el país, los términos políticos históricos han estado marcados por tres factores insuperables: el acaparamiento del poder, la violencia como forma de respuesta política y el favorecimiento de las élites económicas; esta es la característica más evidente de la historia partidista colombiana, ningún acuerdo o alianza ha dado al traste con estos elementos que hacen parte de la cultura cívico-política de los colombianos.

La Violencia fue un período de la configuración política y partidista colombiana que, aunque puede ser considerado un resultado natural de lo que empieza a suceder en la lucha por poder entre partidos a finales del siglo XIX, también tiene particularidades propias del contexto en que se vivió, entre ellas, la hegemonía de los actores radicales dentro de los partidos, la normalización de la violencia como única estrategia de respuesta frente al otro, la partidización de la población como vigías y garantes de las propuestas, planes e ideologías de los líderes políticos, la profundización del uso de las fuerzas estatales y paraestatales contra los grupos civiles y armados contrarios y el socavamiento de la democracia, garantías sociales y ciudadanía. Todo esto, fue heredado y replicado durante el

período del Frente Nacional, muchos autores señalan el Acuerdo como un logro histórico que cambió la dinámica política nacional, sin embargo, lo que se ha demostrado con la investigación es que la alianza no representó para la estructura política colombiana una propuesta distinta a la dinámica tradicional; su resultado fue otro tipo de violencia, la de los grupos armados insurgentes, al tiempo que se siguió replicando un régimen político de élite y autoritario; el único elemento de democracia del cual se dispuso fueron las elecciones, el sistema del Frente Nacional se asemejaba más a una oligarquía o, incluso, a una dictadura de corte civil.

[www.bdigital.ula.ve](http://www.bdigital.ula.ve)

## CONCLUSIÓN

La historia de la configuración de los partidos políticos en Colombia es una de las más particulares en América Latina, pues por mucho tiempo fue el motivo de confrontaciones, no sólo políticas, sino de violencia directa entre conciudadanos, que de manera clientelar, defendían los intereses, programas e ideologías del partido al cual pertenecían. Esta disertación, se ha trazado la tarea de estudiar la forma de configuración, programas y eventos que se suscitan con la creación de los partidos tradicionales en el país desde 1886 hasta el fin de la alianza conocida como Frente Nacional en 1974. Se ha tomado en cuenta este período de tiempo en particular debido a la relación entre los eventos y comportamientos de los actores políticos que produjeron en el país un entramado de violencia que aún en la actualidad no se ha superado. Las conclusiones más importantes de la investigación estarán dirigidas a responder tres interrogantes centrales:

1. ¿Cuáles fueron las características esenciales y resultados más resaltantes de la época de la hegemonía conservadora que empieza en 1886?
2. ¿De qué manera se reconfigura el sistema político nacional durante la República Liberal (1930) y qué importancia tiene para el devenir de la nación?
3. ¿Cuáles son las causas principales de la Violencia y de qué forma el Frente Nacional puede ser valorado en su rol pacificador y democrático en el país?

En lo que concierne a las ideas fundacionales de los partidos, Liberal y Conservador, y al período hegemónico de este último que empieza en 1886, pueden sintetizarse los eventos, comportamientos y decisiones políticas y económicas que van a configurar la estructura del Estado colombiano durante el siglo XX en tres centrales. En primer lugar, surgen las primeras rencillas programáticas entre liberales y conservadores; el programa de gobierno conservador servía como protector de las grandes empresas, dejando de lado las demandas sociales de los obreros, además de desproteger a los campesinos y poner las tierras a la orden de los grandes terratenientes. En segundo lugar, durante el mandato conservador suceden masacres y huelgas obreras recurrentes, las últimas eran apoyadas por líderes liberales, que ya empezaban a ganar lealtades en el interior del país, sobre todo, en las zonas rurales. Esto último, marcó la dinámica sociedad-partido y dividió de manera clara los puntos a seguir en la lucha de cada una de las organizaciones y los actores que se volverían abanderados de cada una de sus luchas. Finalmente, se puede definir esta como la fase fundacional programática e ideológica de los partidos tradicionales en el país; fue el período de la fragmentación y polarización, la que marcaría desde ese momento la historia política, económica y social de la primera mitad del siglo XX en Colombia.

Por su parte, la República Liberal, que empieza en 1930 y se extiende hasta 1945 cuando López Pumarejo renuncia a la presidencia, se erigió como una etapa de la vida política colombiana que, entre otras cosas, prometía cambios económicos y sociales vitales para la transformación del sistema que reinaba para

entonces. La *Revolución en Marcha* fue el programa político más importante, con él, se buscaba mejorar las condiciones socio-económicas de los ciudadanos mediante la inversión educativa y el distanciamiento de esta de la influencia religiosa, una reforma agraria, cambios constitucionales no sólo en lo concerniente a las instituciones políticas, sino también de la relación Estado-Iglesia, es esta una de las modificaciones más remarcables del proyecto liberal, su lucha contra el poder eclesiástico en todos los espectros de la vida del país. A pesar de haber sido un plan político revolucionario y contra sistema, el cual contó con el apoyo de las bases populares del país, la fase política de la República Liberal no pudo capitalizar sus objetivos centrales debido, entre otras cosas, a las divisiones internas, al poder y presión conservadora y a la violencia que se generaba al interior del país. Fue durante este período que los líderes y las bases de los partidos se radicalizaron a tal punto que cualquier factor podía desencadenar la furia de los grupos sólo para proteger los intereses de quienes ostentaban el poder; el partidismo colombiano alcanzó durante esta fase uno de los picos más viscerales de bifurcación, se inició durante esta la época más intensa de la antipolítica colombiana que daría paso a una violencia sin precedentes.

Respecto al último espacio estudiado, que comprende los años desde 1946 hasta 1974, en el cual se desarrollan *la Violencia* y el acuerdo del Frente Nacional, se puede concluir que las causas principales del primer evento es la respuesta gubernamental conservadora a las protestas y a la oposición que se despertó en Bogotá y al interior del país debido a hechos puntuales como el asesinato de

Jorge Eliécer Gaitán. Asimismo, se libró en parte del territorio nacional un enfrentamiento entre las fuerzas estatales formales y los grupos paramilitares que apoyaban a los conservadores y las guerrillas liberales debido al programa político impuesto. Las masacres se hicieron formas recurrentes de aniquilación del otro; la violencia alcanzó tal nivel que se instauró un gobierno de corte militar, cuyos resultados fueron tan nefastos a nivel de víctimas como el del régimen civil que lo precedió; el país no sólo seguía orientado hacia la antipolítica de su sistema de gobierno, como muchas otras experiencias de violencia política en el mundo, esta última resultaba natural dentro del marco de la incapacidad de pluralidad, negociación y consenso. Luego de años de conflictos internos en cada partido y de una fuerte radicalización bipartidista que generaba olas históricas de violencia, se selló el acuerdo del Frente Nacional, cuyo fin era la alternancia en el poder como medio de superación de la Violencia, el Frente se instauró como un sistema de gobierno que seguía los patrones y características históricas de acaparamiento del poder, fue antidemocrático y no solucionó las demandas sociales de la nación; todo sirvió para generar las condiciones que darían paso a la violencia de guerrillas, es esta una de las consecuencias más infaustas heredadas del conflicto bipartidista que configuró la realidad política, económica, social y cultural en Colombia; con este se institucionalizó la violencia como forma, casi natural, de lucha y de destrucción del enemigo político, cuya resolución ha costado a la nación la estabilidad política, institucional y social hasta el presente.

## BIBLIOGRAFÍA

Acevedo, A. (2015). EL FRENTE NACIONAL: LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL Y CONTINUISMO BIPARTIDISTA EN COLOMBIA (1958-1974). Universidad Nacional de Santander, Colombia. Recuperado de <https://revistascientificas.cuc.edu.co/economicascuc/article/download/671/22/>

Alcántara, M. y Freidenberg, F. (2003). Partidos políticos de América Latina. Fondo de Cultura Económica, México.

Arias, R. (2011). Historia de Colombia contemporánea (1920-2010). Universidad de Los Andes, Uniandes.

Biblioteca Virtual del Banco de la República. (s.f.). La masacre de las bananeras. Red Cultural del Banco de la República en Colombia. Recuperado de <https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-190/la-masacre-de-las-bananeras>

Caballero, C., Pachón, M. y Posada, E. (2012). Cincuenta años de regreso a la democracia: nuevas miradas a la relevancia histórica del Frente Nacional. Universidad de Los Andes, Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo.

Carrillo, D. (2016). Etapas del Desplazamiento: La Violencia (1946-1966). Recuperado de <https://indigenasdesplazados.wordpress.com/2010/11/07/etapas-del-desplazamiento-la-violencia-1946-1966/>

Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. (2016). Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Ediciones Desde Abajo, Segunda Reimpresión.

Gómez, L. (2014). BIOGRAFÍA CONTEXTO E HISTORIA: LA VIOLENCIA EN COLOMBIA, 1946-1965. Universidad del Valle.

González, A. y Molineros G. (2013). Movimiento obrero y protesta social en Colombia: 1920-1950. Historia Caribe, VIII (22). Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93729727007>

González, F. (2014). Poder y violencia en Colombia. Observatorio para el desarrollo, la convivencia y el fortalecimiento institucional. Bogotá, Colombia.

González, F., Bolívar, I. y Vázquez, T. (2002). Violencia política en Colombia: De la nación fragmentada a la construcción del Estado. Centro de Investigación y educación popular, Colombia.

Guzmán, G., Fals, O., Umaña, E. (1980). LA VIOLENCIA EN COLOMBIA. Carlos Valencia Editores, Bogotá.

Henderson, J. (2006). La modernización en Colombia. Editorial Universidad de Antioquia.

Karl, R. (2018). LA PAZ OLVIDADA. Librería Lerner, Colombia.

Marín, Germán. (2010). El Frente Nacional como sistema de coalición y ¿fraude? en las elecciones presidenciales de 1970. Revista Ciencias Humanas, volumen 7, N° 1. Recuperado de <https://revistas.usb.edu.co/index.php/CienciasHumanas/article/view/1793>

Melo, O. (2018). Los límites del poder bajo el Frente Nacional. Seminario "50 años del regreso a la democracia – Nuevas miradas a la relevancia histórica del Frente Nacional". Universidad de Los Andes, Colombia. Recuperado de <http://www.jorgeorlandomelo.com/bajar/loslimitesdelpoder.pdf>

Paredes, Z. y Díaz, N. (2007). Los orígenes del Frente Nacional en Colombia. Presente y Pasado Revista de Historia. Universidad de Los Andes, Venezuela. Recuperado de <http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/23051/articulo11.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Pécaut, D. (2006). CRÓNICA DE CUATRO DÉCADAS DE POLÍTICA COLOMBIANA. Grupo Editorial Norma.

Rehm, L. (2014). La construcción de las subculturas políticas en Colombia: los partidos tradicionales como antípodas políticos durante La Violencia, 1946-1964. Historia y Sociedad, N° 27. Recuperado de <https://revistas.unal.edu.co/index.php/hisysoc/article/view/44582/47853>

Sánchez, G. y Meertens, D. (1983). Bandoleros, gamonales y campesinos: el caso de la Violencia en Colombia. El Áncora Editores.

Valencia, A. (2015). La invención de la desmemoria: el juicio contra el general Gustavo Rojas Pinilla en el Congreso de Colombia (1958-1959). Universidad del Valle, Programa Editorial.

Ware, A. (2004). Partidos políticos y sistemas de partidos. ISTMO, España.